

INE/CG1182/2021

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” Y SU CANDIDATA AL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN, EN PUEBLA, MARÍA NORMA LAYÓN AARUM, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/909/2021/PUE

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.

VISTO para resolver el expediente **INE/Q-COF-UTF/909/2021/PUE**, integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de partes de la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja suscrito por César Galicia Moreno, representante propietario del candidato independiente Filemón Ramírez Sánchez ante el Consejo Municipal de San Martín Texmelucan del Instituto Electoral del Estado de Puebla, en contra de la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla”, integrada por los partidos del Trabajo y Morena, así como de María Norma Layón Aarum, otrora candidata al cargo de Presidenta Municipal de San Martín Texmelucan de la citada entidad, denunciando hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos dentro del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en Puebla. (Fojas 1 a 437 del expediente)

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados

por el quejoso en su escrito de queja, detallados en el ANEXO 1 de la presente Resolución.

“(…)

I. HECHOS

1. ANTECEDENTES

[...]

2. DETERMINACIÓN DE TOPE DE CAMPAÑA

[...]

3. REGISTRO E INICIO DE CAMPAÑA

[...]

4. Actos de la imputada.

A efecto de clarificar los actos que se consideran contrarios a la norma en materia de fiscalización y de posible rebase de topes de campaña, primero se señalarán aquello (sic) actos que trasgreden la norma aludida, conforme a lo siguiente:

A. Reporte De Eventos No Onerosos

Marco Legal.

Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral

Apartado 7 Bis

Gastos de eventos políticos y

casas de precampaña y campaña

Control de agenda de eventos políticos

Artículo 143 Bis.

[...]

Una vez que fue avalado el registro, el candidato en mención inició sus actos de campaña, mismos que conforme a la revisión de su informe de agenda de eventos inserta en el portal de rendición de cuentas y resultados de la fiscalización con la URL <https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/descarga-de-reportes>, se desprenden que la candidata informó en el portal la realización de los eventos que se enlistan en el Anexo 1 de la presente.

En el anexo anteriormente descrito se puede apreciar fecha y hora de los eventos, así como el tipo de evento (oneroso/no oneroso), por otra parte, en cada uno de ellos señala que estos no tuvieron el carácter de onerosos, o que, dicho coloquialmente, su realización no ocasionó “gasto económico” alguno que debiera informarse a la autoridad fiscalizadora a través del Sistema de Contabilidad en Línea, tal y como lo ordena el numeral 3 del artículo 127¹ del Reglamento de Fiscalización; sin embargo, esta manifestación, aparte de resultar inverosímil por sí misma, resulta falsa al tenor del análisis de diversos eventos que la candidata realizó en el desarrollo de sus actividades de campaña, mismas que fueron documentadas a través de imágenes fotográficas

y videos, las cuales fueron cotejadas en la página oficial del candidato en la red social Facebook, identificada en la liga:

<https://www.facebook.com/NormaLayon>

creada el tres de noviembre de 2015 y cuyo encabezado y contenido muestra a continuación:

[Inserta imagen]

Perfil qué, como lo podrá apreciar la autoridad, es el sitio donde el candidato ha promovido y aprovechado el alcance de la plataforma para difundir sus eventos y propaganda electoral, interactuando con su audiencia mediante transmisiones en vivo y mensajes de invitación, lo que ineludiblemente le liga como beneficiario de la cuenta.

En razón de lo anterior, cada uno de los eventos a señalar serán evidenciados conforme a lo que a la vista resalta de cada publicación, dando cuenta de datos preciso sobre el tiempo, modo, lugar, y un estimado sobre la cuantía de los elementos detectados en el evento, para lo cual, se tomará como referencia la **matriz de precios unitarios y su similitud por región** emitida en el anexo del acuerdo INE/CG249/2021, en el que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral resolvió sobre las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, diputaciones locales, ayuntamientos y presidencias de comunidad, correspondientes al proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el Estado de Puebla. Listado que servirá de base objetiva para identificar los horarios de los eventos y medir la cuantía de cada elemento identificado en cada evento denunciado de conformidad a lo establecido en el artículo 27, numerales 1 y 2, del Reglamento de Fiscalización que a la letra señala:

[...]"

[Pruebas]

1. Inicio de campaña.

(...)"

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:

- **Documental Pública:** consistente en Acta de fe de hechos tirado por la Licenciada Hilda Torres Gómez. Notaría pública No. 56, Vol. 260, instrumento notarial 22,998, folio 21,664. En la cual se da fe de la veracidad de los múltiples enlaces de páginas de Facebook.
- **Técnica:** Diversas direcciones electrónicas, capturas de pantalla, fotografías y videos obtenidos de las direcciones electrónicas proporcionadas.

III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El treinta de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, tuvo por recibido el escrito de queja referido en el antecedente I de la presente Resolución. En esa misma fecha se acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente respectivo y registrarlo en el libro de gobierno con el número **INE/Q-COF-UTF/909/2021/PUE** por lo que se ordenó el inicio del trámite y sustanciación, dar aviso del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo General así como a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, notificar al denunciante del inicio del procedimiento y emplazar a los partidos del Trabajo y MORENA y a su entonces candidata a la Presidencia Municipal de San Marín Texmelucan , María Norma Layón Aarum (Foja 438 y 439 del expediente).

IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.

a) El treinta de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva Cédula de conocimiento (Fojas 440 a 443 del expediente).

b) El tres de julio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de recepción e inicio, la Cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho Acuerdo y Cédula fueron publicados oportunamente (Foja 444 y 445 del expediente).

V. Notificación de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El cinco de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/32643/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 448 y 449 ter del expediente).

VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El cinco de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/32642/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 446 y 447 ter del expediente).

VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante Propietario del candidato independiente Filemón Ramírez Sánchez ante el Consejo Municipal de San Martín Texmelucan en Puebla. El ocho de julio dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLE/VE/EF/1495/2021, la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Puebla, notificó el inicio del procedimiento de mérito a Cesar Galicia Moreno, Representante Propietario del candidato independiente Filemón Ramírez Sánchez ante el Consejo Municipal de San Martín Texmelucan (Fojas 578 a 586 del expediente).

VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al Representante Propietario del Partido MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, integrante de la Coalición “Juntos Haremos Historia”.

a) El dos de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/ 32644/2021, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó al Representante del partido MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las constancias y elementos de prueba que integraban el escrito de queja (Fojas 459 a 464 del expediente).

b) El cinco de julio de dos mil veintiuno, el Representante Propietario del Partido MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio contestación al emplazamiento de mérito, que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala (Fojas 513 a 541 del expediente):

“(…)

II.- CONTESTACIÓN DE HECHOS

Ahora bien, aclarada la hipótesis en la que se sustenta la infundada queja, me permito contestar los hechos a partir de lo siguiente:

- 1. Por cuanto hace al hecho número 1 inciso a) y b) del escrito de queja, resultan hechos notorios que no están sujetos a controversia y por tanto no son objeto de pronunciamiento de nuestra parte.*
- 2. Por cuanto hace al hecho marcado con el número arábigo 2 del escrito de queja que nos ocupa, resultan hechos notorios que no están sujetos a controversia y por tanto no son objeto de pronunciamiento de mi parte.*

3. Por cuanto hace al hecho marcado con el número **3** del escrito de queja que nos ocupa, resultan hechos notorios que no están sujetos a controversia y por tanto no son objeto de pronunciamiento de mi parte.

4. Por cuanto hace al hecho marcado con el número **4** del escrito de queja, me permito manifestar que es impreciso ya que todos los actos realizados en campaña cumplen los lineamientos de la norma en materia de fiscalización y de ninguna manera se ha rebasado el tope de campaña, aunado a que en todo momento se ha informado de las actividades y gastos generados en la campaña de mis representadas.

Aunado a lo anterior, no debe considerarse como un hecho sino como una simple manifestación de la denunciante, por tratarse de asunto diverso que no relaciona objetivamente con el presente asunto, por lo que resultaría ilegal que se tuviera por reproducido algo que no obra en autos del presente expediente, misma que debe ser sustentada con los hechos narrados y no con hechos anteriormente argumentados en el escrito de queja, en razón de que como se ha mencionado, se estaría dando pauta a las erróneas apreciaciones del denunciante y no a lo reportado por mis representadas ante esta autoridad.

Consecuentemente y toda vez que mis representadas en ningún momento han realizado actos que no hayan sido reportados a la Unidad Técnica de Fiscalización, por ende, la violación denunciada resulta inexistente en razón de que, como se desprende del caudal probatorio ofrecido por la quejosa, no existen elementos suficientes para acreditar que los gastos efectuados por mis representados, sean mayores a los reportados a la autoridad fiscalizadora, por lo tanto carece de sustento probatorio mínimo indispensable para acreditar dicha omisión, resulta aplicable al caso concreto el siguiente criterio jurisprudencial:

CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- [...]

En ese sentido, es totalmente falso que mis representadas hayan realizado eventos y contrataciones fuera de las normas de fiscalización, como erróneamente lo pretende hacer valer la denunciante de manera osada, realizando aseveraciones de las cuales no aporta elementos probatorios, queriendo sorprender a esta autoridad con argumentos vacíos, carentes de elementos mínimos necesarios para tener certeza sobre la existencia de los hechos denunciados.

No obstante a que al hoy quejoso le corresponde la carga de la prueba, esta autoridad podrá advertir que las pruebas ofrecidas por la quejosa y con las que pretende acreditar los hechos de su queja, no reúnen los elementos indispensables para considerarse una **prueba técnica**, de conformidad con el artículo 17 punto 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que a la letra dice:

Artículo 17.

Prueba técnica

...

2. [...]

Lo anterior es así, toda vez que, ni en la queja, ni en el instrumento notarial número veintidós mil novecientos noventa y ocho, del volumen doscientos sesenta, con número de folio veintiún mil seiscientos sesenta y cuatro, tirado ante la Fe de la Licenciada Hilda Torres Gómez, Titular de la Notaría Pública número cincuenta y seis, del Distrito Judicial de Puebla, Puebla; se acredita la descripción de la persona denunciada, en todos y cada uno de los eventos que se denuncian, así como de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos denunciados, por lo que en consecuencia carece de los elementos esenciales para acreditar su dicho, en virtud de que:

- No cuenta con plena identificación de la denunciada a través de su descripción física detallada.*
- Si bien es cierto refiere las (sic) realización de eventos, no señala con exactitud el lugar en que estos fueron verificados, en que delegación, colonia, y/o barrio.*
- Es omiso en detallar el modo, es decir cómo se desempeñó el evento y tiempo es decir el momento en cómo se desarrolló el evento.*
- Ni tampoco acredita con prueba alguna los gastos o rebase que denuncia.*

De lo anterior, es preciso señalar que las aseveraciones vertidas por el quejoso, en su escrito de denuncia, son imprecisas, ya que se basan en mera presunción, omitiendo especificar el o los registros contables que bajo su óptica incurren en dicha vulneración a la normatividad electoral, por lo que no se actualiza transgresión alguna al marco normativo en materia de fiscalización.

En ese sentido, el quejoso no adjunta algún elemento probatorio, incluso de carácter indiciario, que permita acreditar la veracidad de la presunta aportación o gastos denunciados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, numeral 1, fracción V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización que refiere:

Artículo 29.

Requisitos

[...]

De conformidad con el dispositivo legal transcrito, se deriva que es obligación por parte de los promoventes el ofrecer las pruebas o indicios con que cuente; es decir, todos aquellos elementos que permitan el conocimiento de los hechos motivo de inconformidad. En el caso que nos ocupa el quejoso no aportó alguna respecto a los gastos que denuncia, por tanto, no existió indicio que pudiera ser relacionado con estos: es decir, no hay elemento alguno que permita tener certeza de la existencia de que mis representados hayan realizado gastos no reportados.

En otro contexto, es inverosímil que el quejoso pretenda hacer creer a esta autoridad que las personas que asisten a los eventos y/o actos de campaña,

utilizando cualquier medio de transporte; realizan aportaciones por asistir en vehículos o algún otro medio de transporte; pues participan en los eventos, en uso de sus derechos político electorales, así como de su propia libertad de circulación y tránsito, por lo que es improcedente lo manifestado por el hoy quejoso, ya que no aporta elementos de que la participación de las personas que refiere en cada una de sus relaciones fuera de manera onerosa, es decir que existiera un pago, o en su caso, aportación por el uso de los medios de transporte utilizados, de ahí lo improcedente de la queja que nos ocupa.

Del análisis al escrito de queja se observa que Cesar Galicia Moreno, representante propietario del candidato independiente Filemón Ramírez Sánchez, señala presuntos gastos de campaña derivados de diversos eventos; sin embargo, no proporciona prueba alguna respecto a dichos gastos, ni aporta elementos que permitan presuponer la veracidad de estos, tales como identificación de las personas que participaron en los mismo o que recibieron apoyos económicos o en especie por su participación, que supongan un gasto excesivo de campaña.

En ese sentido, esta representación insiste en que es obligación del quejoso ofrecer las pruebas o indicios con que cuente; es decir, todos aquellos elementos que permitan el conocimiento de los hechos motivo de inconformidad. En el caso que nos ocupa el quejoso no aporta prueba alguna respecto a los gastos que denuncia, por tanto, no existe indicio que pueda ser relacionado con estos; es decir, no hay elemento alguno que permita tener certeza respecto a la existencia de que la parte denunciada haya realizado gastos que refiere.

En ese sentido, las pruebas técnicas que ofrece el quejoso adolecen de eficacia probatoria necesaria a efectos de tener por acreditados los conceptos denunciados, por lo que carecen del grado de convicción necesario a fin de tener por acreditarlos los extremos de la denuncia.

*En consecuencia de lo anterior, desde este momento solicitamos no sea vulnerada la esfera jurídica de mis representadas y en todo momento se tutele el principio concerniente a la presunción de inocencia, ya que de lo controvertido en el proceso en el que se actúa y toda vez que con lo investigado por esta misma autoridad electoral, no se constituye la posibilidad de poder fijar responsabilidad alguna con carácter de resultado material a mi representado. Aunado a que la Carta Magna, establece la presunción de inocencia, como derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de derecho humano fundamental que posee eficacia en su doble aspecto, pues por una parte opera en las situaciones extraprocesales y constituye un derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o participe de los hechos de carácter delictivo **o análogos**, y por otro lado, este derecho opera con el flujo decisivo en el régimen jurídico de la prueba, esto es que debe prevalecer la presunción de inocencia sobre mi representada, respecto de los hechos denunciados por*

la quejosa, toda vez que no se demostró la existencia de responsabilidad alguna.

Sirve de sustento a lo antes expuesto la Jurisprudencia 21/2013, que refiere:

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- [...]

Por lo que, para demostrar las falsas pretensiones de la parte quejosa, se exponen las siguientes:

CONSIDERAIONES DE HECHO Y DE DERECHO

Respecto al señalamiento del hoy quejoso al referir que la Coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla” integrada por los Partidos del Trabajo y Morena, así como de María Norma Layon Aarum; hayan sido omisos en reportar a la Unidad Técnica de Fiscalización actos y gastos de campaña publicados en sus redes sociales, no se advierte que se desprendan elementos que permitan deducir circunstancias de tiempo, modo o lugar en el que fueron tomadas las fotografías o bien, que lo que en ellas se ve, tenga relación con alguna trasgresión a la norma electoral por parte de la otrora candidata. Aunado a que, la queja interpuesta por Cesar Galicia Moreno, representante propietario del candidato independiente Filemón Ramírez Sánchez, carece de elementos probatorios que permitan tener certeza sobre la existencia de los hechos denunciados, máxime que la simple publicación de diversas fotografías, es insuficiente para justificar la razón de su dicho de la parte quejosa.

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, no deja de llamar la atención que dentro de la narración de los hechos vertidos por la denunciante realiza una serie de aseveraciones carentes del sustento probatorio, las cuales pretende articular a partir de premisas erróneas como las señaladas en el apartado de “HECHOS”.

Esto es relevante, en tanto que la quejosa hace depender sus argumentos en una certificación de hechos, mismas que se limitan a constatar supuestos eventos realizados, manifestando la existencia de diversos gastos, sin embargo, de la certificación de hechos, contenida en el Instrumento Notarial número veintidós mil novecientos noventa y ocho, del volumen doscientos sesenta, con número de folio veintiún mil seiscientos sesenta y cuatro, tirado ante la Fe de la Licenciada Hilda Torres Gómez, Titular de la Notaría Pública número cincuenta y seis, del Distrito Judicial de Puebla, Puebla; se deja constancia de hechos que no ocurrieron en presencia de el para atestiguar y en consecuencia asentarlos en el acta notarial, ahora bien las mismas no se fe data que mi representada haya erogado gastos que al decir de la denunciante fueron omitidos de reportar ante la autoridad fiscalizadora; por lo tanto las mismas deben considerarse por esta autoridad como pruebas ineficaces e insuficientes ya que las mismas no son capaces de aportar ni relatar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la omisión del reporte de gastos a la autoridad fiscalizadora argumentadas como infracciones que ineficazmente pretende imputar ya que no acreditan, en modo alguno, la existencia de ilícitos electorales, vicios o irregularidades.

*Sobre este punto, sirve de apoyo la jurisprudencia 2001825 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS”, que refiere que si los agravios parten de premisas falsas resultan inoperantes, **ya que a ningún fin práctico conducía su análisis y su calificación, pues al partir de una suposición que no resulta verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida.***

Por lo que, de acuerdo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia dichas certificaciones deben ser analizadas por la autoridad ante la cual se promueve y confirmar el hecho de que de las mismas no se pueden acreditar los extremos que pretende hacer valer la parte denunciante. Lo anterior partiendo del hecho de que la prueba es considerada como un dato objetivo, capaz de producir un conocimiento cierto para comprobar los extremos de la imputación, por lo que si bien la certificación notarial tiene valor probatorio, en este caso concreto no se puede considera la misma como suficiente para valorar la supuesta transgresión realizada a la normativa fiscal derivado de una omisión por parte de mis representados, toda vez que esta prueba aportada por el quejoso no puede ser valorada como tal, en razón de que las mismas no acreditan ni la erogación de gastos, ni la falta de reporte de los mismos, aunado a que si se diera el caso de que la considerara, estaría vulnerando la esfera de derecho fundamental de mis representados.

***Por otra parte, y en cuanto al argumento vertido por la denunciante referente a que los reportes se han realizado de manera incompleta, imprecisa y extemporánea;** como ya se ha mencionado con antelación la misma no aporta medios de prueba que sustenten sus argumentos subjetivos que comprueben dicho extremo, ahora bien, por cuanto hace a la extemporaneidad me permito manifestar que el poder judicial ha otorgado a nuestro Estado de Derecho una tesis jurisprudencial, que se ajusta al caso concreto; no omitiendo mencionar que **en ningún momento se pretenden que la tesis jurisprudencial** que a continuación se cita, **sea considerado el criterio de la tesis** que emite el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que se ajusta al caso concreto.*

OBLIGACIÓN FISCAL. SU CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO ES ESPONTÁNEO, MIENTRAS LA AUTORIDAD NO NOTIFIQUE AL CONTRIBUYENTE LA INFRACCIÓN DESCUBIERTA.- [...]

Es importante señalar que, del escrito de queja presentado por Cesar Galicia Moreno, representante propietario del candidato Independiente Filemón Ramírez Sánchez, se desprende que en la misma manifiesta lo siguiente: “...se tiene la presunción de que se ha omitido reportar gastos...”

Ahora bien, es inverosímil que la parte denunciante quiera sorprender a la autoridad pretendiendo sustentar la queja presentada en contra de mi

representado en menos presunciones personales sin carga probatoria alguna y no en hechos comprobados.

Como se mencionó, si bien es cierto el quejoso presentó como medio de prueba diversas fotografías impresas, las que coinciden con las aportadas en medio magnético y prueba técnica, de las cuales se tienen por ciertos los eventos, no menos cierta es también, que estas per se no acreditan el gasto denunciado y/o rebase de gastos de campaña, por lo que deberán desestimarse en los términos supra indicados.

*Por lo que solicito atentamente a esta Unidad Técnica de Fiscalización se sirva declarar **infundada** la queja y el procedimiento en que se actúa, en tanto que ha quedado acreditado que la pretensión de la denunciante parte de una argumentación equívoca con premisas erróneas, adicional a que los hechos que denuncia no constituyen, por sí mismos, algún ilícito en materias de fiscalización.*

Aunado a que, de que las pruebas ofrece en su escrito inicial son también insuficientes e ineficaces para acreditar los extremos de sus afirmaciones, en los términos que han sido señalados a lo largo del presente libelo.

*Finalmente, a fin de acreditar la falsedad de los hechos injustamente atribuidos a mis representados Coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla” integrada por los Partidos del Trabajo y Morena, así como de María Norma Layon Aarum, candidata a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Estado de Puebla, y tomando en consideración que es un principio general del derecho el que los **hechos negativos están exentos de probarse (la no realización de gastos de campaña)**, se ofrecen las siguientes:*

(...)”

IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, integrante de la Coalición “Juntos Haremos Historia”.

a) El dos de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/ 32645/2021, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó representante del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las constancias y elementos de prueba que integraban el escrito de queja (Fojas 465 a 470 del expediente).

b) El cinco de julio de dos mil veintiuno, el Representante Propietario del Partido de Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio contestación al emplazamiento de mérito, que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II,

inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala (Fojas 542 a 558 del expediente):

“(…)

CONSIDERACIONES PREVIAS:

De manera previa a la formulación de excepciones y defensas, esta autoridad fiscalizadora debe tener en cuenta que:

- a) *En términos del artículo 39 del Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, el Consejo debe resolver la (sic) quejas relacionadas con las precampañas o campañas a más tardar en la sesión en que se apruebe el dictamen o resolución de los informes de campaña, siempre y cuando las quejas se presenten a más tardar 7 días después de concluidos esos periodos y si es presentada en fecha posterior, será sustanciado y resuelto conforme a las reglas y plazos señalados en el capítulo II.*
En el caso que nos ocupa, del análisis del acuse de presentación de la queja, se advierte que la misma fue presentada el 21 de junio (15 días después de concluida la jornada electoral), por lo cual debe ser sustanciada y resuelta en los plazos establecidos en el capítulo II del Reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización.

No obstante lo anterior, ad cautelam se manifiesta lo siguiente:

- b) *En términos del convenio de coalición, la candidatura de la presidencia municipal de San Martín Texmelucan fue asignada al partido MORENA.*
- c) *En el mismo sentido, se hace notar que, en términos del convenio de coalición, el órgano encargado de realizar los informes de ingresos y gastos se encuentran a cargo de MORENA por lo cual toda la información contable se encuentra en poder del referido instituto político.*
- d) *Con relación a todas y cada una de las presuntas omisiones de reporte de gastos de campaña o el presunto rebase de tope de gastos de campaña, esta autoridad debe tener en cuenta que el denunciante realiza afirmaciones vagas, genéricas e imprecisas que no logran acreditar de forma fehaciente circunstancias de modo, tiempo y lugar, además de que carecen de sustento probatorio de ahí que deban declararse infundados sus conceptos de vulneración.*
- e) *Respecto a todos y cada uno de los gastos que el denunciante califica como “gastos por contratación en medio de comunicación” se niega cualquier tipo de gasto de esa naturaleza dado que todas y cada una de las entrevistas que refiere el denunciante, fueron realizadas en el marco de libre ejercicio de labor*

periodística, misma que goza de un manto protector especial salvo prueba en contrario y, en el caso que nos ocupa, el denunciante se limita a afirmar lisa y llanamente que la otrota (sic) candidata realizó gastos por contratación en medios de comunicación sin que en la especie ofrezca o aporte prueba alguna, de ahí que se solicite a esta autoridad administrativa electoral declarar infundados todos y cada uno de los presuntos gastos por “contratación en medios de comunicación.

- f) *Por cuanto hace a todos y cada uno de los videos que el denunciante reporta como “producción de videos profesionales” esta autoridad debe advertir que tal aseveración resulta falsa pues del análisis del contenido se observa que se trata de videos caseros, sin que contengan características para ser catalogados como “profesionales”, aunado a lo anterior, es inconcuso que para acreditar la calidad de “videos profesionales”, el denunciante no ofrece ni aporta prueba alguna sino que se limita a realizar afirmaciones subjetivas. En razón de lo anterior, se concluye que el “gasto de producción” de todos y cada uno de los videos calificados con un monto de \$5 800 atribuido de manera subjetiva por el denunciante es infundado pues se trata de videos caseros cuyo gasto no asciende al monto que refiere el denunciante.*

Objeción a pruebas

Con relación a todos y cada uno de los presuntos hechos y omisiones imputados al candidato, se niegan en su totalidad, respecto a las pruebas ofrecidas para probar el dicho del denunciante, se objeta el valor y alcance probatorio de los mismos ya que se trata de pruebas técnicas, mismas que por su propia naturaleza resulta imperfectas, aunado a lo anterior, es inconcuso que la propia Sala Superior ha determinado que tratándose de pruebas técnicas, el oferente se encuentra obligado a describir de forma pormenorizada y específica las circunstancias de modo, tiempo y lugar que pretende acreditar, lo cual evidentemente incumplió.

En razón de lo anterior, se niegan en su totalidad los presuntos hechos, omisiones o conductas reprochables que refiere el denunciante.

Al efecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia emitida por la SCJN que refiere:

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. [...]

PRESUNTAS OMISIONES DE REPORTE DE GASTOS DE CAMPAÑA.

*Por cuanto hace a todos y cada uno de los gastos que **el candidato** y este instituto político han realizado por concepto de campaña, desde este momento se hace notar a esta autoridad que todos y cada uno de los gastos de campaña y en los que participó el PT, fueron estricta y oportunamente reportadas en*

tiempo y forma a través del Sistema de Fiscalización Integral (SIF), tal y como se acredita con la información que se encuentra contenida en el SIF.

CONDUCTAS VAGAS, GENÉRICAS E IMPRECISAS

En relación a los gastos presuntamente atribuibles a la coalición y a los denunciados (presuntas omisiones), las conductas denunciadas resultan vagas, genéricas, imprecisas y subjetivas y se encuentran soportadas en pruebas técnicas² (imperfectas por la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar), que por su naturaleza pueden ser fácilmente objeto de manipulación y por lo mismo, solo pueden tener valor indiciario.

En ese tenor es evidente que en el caso específico resulta insuficientes para acreditar circunstancias de modo tiempo y lugar y para generar convicción respecto a lo que pretende acreditar la parte quejosa.

*En el caso se trata de conductas vagas, genéricas e imprecisas puesto para acreditar su dicho ofrece y aporta imágenes que al constituir pruebas técnicas (valor indiciario), resultan insuficiente para acreditar su dicho en razón de que de su análisis no pueden acreditarse circunstancias de modo, tiempo y lugar de ahí que se solicite a esta autoridad declarar infundados los motivos de queja promovidos por la accionante pues se insiste en que sus pruebas **resultan insuficientes para crear convicción** respecto a las presuntas omisiones cualitativa y cuantitativamente.*

*De igual manera, es evidente que el denunciante **no menciona de manera específica el contenido exacto de sus pruebas o lo que pretende acreditar con cada una**, por lo que incumple con los criterios establecidos por las Sala Superior contenidos en la jurisprudencia 36/2014 con el rubro PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS Y CIRCUNTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.*

En ningún momento la quejosa menciona las circunstancias concretas de modo tiempo y lugar relacionadas con las pruebas que ofrece y aporta, de ahí que se arribe a la conclusión de que debe declararse infundado el presente procedimiento sancionador en contra de mi representado, pues se trata de afirmaciones vagas, genéricas e imprecisas que no encuentran soporte probatorio en pruebas documentales idóneas, y suficientes.

Así, al no describir con precisión las circunstancias de modo, tiempo y lugar y la forma en que presuntamente se relacionan con las pruebas que ofrece y aporta, el denunciante incumple con la carga prevista en el artículo 29 numeral

² Jurisprudencia 4/2014 PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES. POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- [...]

I fracción IV y V del Reglamento y en consecuencia no aporta elementos suficientes que hagan verosímil la versión de su denuncia,

En tales circunstancias, se solicita a esta autoridad fiscalizadora declarar infundados los conceptos de violación alegados por el denunciante, lo anterior atentos a las siguientes tesis de jurisprudencia:

Jurisprudencia 21/2013

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES- [...]

Jurisprudencia 7/2005

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURIDICOS APLICABLES- [...]

OBJECCIÓN A TODAS Y CADA UNA DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS Y APORTADAS: desde este momento se objeta el valor y alcance probatorios de todas y cada una de las pruebas ofrecidas y aportadas, dado que se trata de:

- a) ***Fotografías y videos***, de las cuales nos deslindamos y al ser pruebas técnicas que pueden ser fácilmente manipulables, y alterables, además de que no se acreditan de manera fehaciente circunstancias de modo, tiempo y lugar, no existe nitidez en su contenido, por lo que evidentemente no puede tener el valor y alcance probatorio que pretende el accionante ***en términos del artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización***, son insuficientes para generar valor convictivo en los términos en que pretende el quejoso.

En el caso, aun cuando el quejoso tiene la carga de la prueba no acredita los extremos de sus afirmaciones siendo que se debe acreditar su pretensión de manera objetiva y material, lo cual no logra en virtud de que sus medios de prueba resultan ser insuficientes, ineficaces y no idóneos.

*Por cuanto hace a todas y cada una de las pruebas ofrecidas y aportadas por el quejoso, se reitera que las mismas son genéricas, vagas e imprecisas y más aún, resultan total y absolutamente subjetivas pues hace referencia a presuntas fotografías y videos **sin que establezca con precisión las circunstancias de modo, tiempo y lugar.***

Por lo que los medios de pruebas ofertados, no pueden tener los alcances ni la eficacia probatoria que pretende atentos a la jurisprudencia:

4/2014 Jurisprudencia PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN- [...]

36/2014

Jurisprudencia

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR- [...]

En tales circunstancias, en el caso que nos ocupa, resulta evidente que el presunto rebase de tope de gastos de campaña que argumenta no cumple con los parámetros de objetividad, habida cuenta que de todas y cada una de las afirmaciones y argumentos del accionante, tienen como base el propio criterio del enjuiciante, su discrecionalidad y subjetividad, muestra de ello es que ofrece como probanzas, (diversas imágenes), constituyen meras apreciaciones subjetivas, afirmaciones unilaterales, vagas, genéricas e imprecisas.

Con relación al supuesto rebase de tope de gastos de campaña, se hace notar a esta autoridad que tal concepto de vulneración se encuentra soportada en afirmaciones subjetivas del quejoso dado que de forma discrecional (sic) y arbitraria y pretende atribuir de manera dolosa presuntos gastos de campaña sin que en la especie soporte su dicho en pruebas plenas, fehacientes e indubitables.

Por los razonamientos y argumentos expresados con anterioridad, se reitera que en la especie, no existe vulneración a la normatividad electoral en materia de fiscalización por parte del Partido del Trabajo o de la candidata denunciada, por lo que se solicita a este órgano administrativo electoral resolver infundado el presente procedimiento.

*A fin de acreditar lo anterior, ofrecemos las siguientes pruebas:
(...)"*

X. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja a María Norma Layón Aarum, otrora candidata a la Presidencia Municipal de San Martín Texmelucan, por la Coalición “Juntos Haremos Historia”.

a) El seis de julio dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JD05/VS/6281/2021, signado por el Vocal Secretario de la 05 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado de Puebla, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó a María Norma Layón Aarum, otrora candidata a la Presidencia Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla,

corriéndole traslado con la totalidad de las constancias y elementos de prueba que integraban el escrito de queja (Fojas 588 a 602 del expediente).

b) El diez de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, María Norma Layón Aarum, otrora candidato a Presidenta Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, presentó respuesta al emplazamiento de mérito, en la Junta Local Ejecutiva del estado de Puebla, que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala (Fojas 603 a 613 del expediente):

“(…)

Desahogo del emplazamiento

Del análisis al escrito de queja presentado por Filemón Ramírez Sánchez, se desprende la pretensión de tergiversar los hechos acontecidos alrededor de mi campaña electoral, la cual se realizó en todo momento conforme al principio de transparencia en la rendición de cuentas, siendo ánimo del actor el engañar a la autoridad electoral a efecto de conseguir fines personales.

*Esta afirmación encuentra sustento en el hecho que Filemón Ramírez Sánchez parte de una premisa falsa para estructurar su escrito de queja, **pues afirma que todos mis eventos fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización como «no onerosos»³**, lo cual en la especie no aconteció.*

Expuesto lo anterior, daré respuesta a argumentos expuestos por el quejoso, de manera que, por cuestiones de practicidad en el el (sic) estudio del presente asunto y a efecto de presentar argumentos con mayor claridad, el desahogo se dividirá en los siguientes apartados:

A. Evidente frivolidad del escrito de queja.

B. Los hechos denunciados no representan un ilícito en materia de financiamiento.

A. Evidente frivolidad del escrito de queja.

Los argumentos expuestos en el escrito inicial de queja son confusos ya que no es posible considerar que exista conducta alguna que sea reprochable por la norma electoral, pues refieren a hechos genéricos e imprecisos, de manera que es oportuno retomar el principio general del derecho «quien afirma se encuentra obligado a probar» y el quejoso se limita a hacer una serie de imputaciones sin ofrecer medios de convicción ni razones suficientes para sostener su dicho, por lo que la presente queja debió declararse improcedente por ser frívola en términos de lo dispuesto en el artículo 30, numeral 1 fracción 11 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en relación al artículo 440 numeral 1, inciso e) fracciones 1,

³ Página 4 del escrito de queja

11, 111, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que los hechos mencionados no son por sí mismos violatorios de ninguna disposición en materia de fiscalización electoral.

*De igual manera, se advierte el carácter frívolo del escrito de queja a partir de que su pretensión jurídica es inalcanzable pues tiene como premisa principal un hecho falso, consistente en que supuestamente todos los eventos de campaña fueron reportados como **no onerosos** ante la autoridad fiscalizadora. A partir de lo cual, supone que hace del conocimiento de esta autoridad gastos no reportados y que no coinciden con la agenda informada en el SIF. Lo cual es, cuando menos, impreciso o incorrecto tal y como puedo evidenciar a continuación:*

[Inserta imagen]

Con el objetivo de engañar a la autoridad a través de la denuncia de hechos falsos y tergiversados, Filemón Ramírez Sánchez presentó la misma liga de Internet antes exhibida asegurando en la página 4 de su escrito que yo no había reportado ni un evento de carácter oneroso, pero que mis redes sociales evidencian un gasto que puede representar el rebase de topes de campaña.

Como quedó evidenciado, la columna vertebral del escrito de denuncia no encuentra ninguna clase de sustento fáctico o jurídico, pues se reportaron ante esta autoridad 78 eventos de carácter oneroso.

Por lo que hace a sus medios de prueba, las imágenes obtenidas de mis propias redes sociales de publicaciones que se encuentran ahí alojadas, de ninguna manera aportan elementos para demostrar la celebración de eventos no reportados o la efectuación de gastos no incluidos en los informes respectivos. Lo único que prueban es lo que yo misma hice público a través de mi cuenta en la red social Facebook y que pudo ser revisado por esta autoridad en ejercicio de sus facultades de verificación y monitoreo.

Ahora bien, si la premisa que sostiene el argumento toral de la denuncia es falsa, entonces nos encontramos ante la causal de improcedencia referida a que "Los hechos narrados en la denuncia resulten notoriamente inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable a través de este procedimiento". En este sentido, la queja debió considerarse improcedente con fundamento en el el (sic) artículo 30, numeral 1, inciso a).

Aunado a lo anterior, Filemón Ramírez García afirma que se llevaron a cabo gastos por adquisición de tiempos en radio y televisión, lo cual solo sostiene a través de pruebas técnicas y no así de documentales que puedan comprobar la erogación.

Esto último porque no en ningún momento sucedió dicha compra o trato con radiodifusora o concesionaria, por lo que afirmamos que el quejoso una vez más está denunciando hechos falsos.

Por otra parte, esta autoridad debe considerar que los eventos denunciados, por tratarse de entrevistas frente a medios de comunicación, gozan de una especial protección como ejercicios genuinos del derecho a la libertad de

prensa⁴. Afirmar que se contrataron tiempos de radio o televisión por la celebración y difusión de entrevistas celebradas frente a periodistas supone para quien lo hace un estándar probatorio alto y reforzado, pues implica demostrar que no fue el resultado de un genuino esfuerzo para la difusión de ideas o de información del interés general, sino un mutuo acuerdo para favorecer a una de las partes con un posicionamiento electoral indebido.

*Ahora bien, la Sala Superior ha señalado que se entienden como frívolas las demandas o promociones en las cuales **se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente**, por ser notorio o evidente que no se encuentran al amparo del derecho⁵.*

La posibilidad de desechar un procedimiento, juicio o medio de impugnación por su frivolidad no restringe el derecho de acceso a la justicia, pues la finalidad de esta previsión es la de reprimir que las partes procesales presenten escritos o promociones con la única finalidad de dilatar los procesos o desgasten el actuar de la autoridad al abocarlas al estudio de pretensiones cuya consecución es jurídicamente inalcanzable.

La frivolidad se puede estudiar a partir de la pretensión o petición de la parte actora. En otras palabras, a partir del resultado que pretende conseguir a través de la reparación del agravio que estima fundado. Por lo cual un medio de impugnación en materia electoral deberá desecharse de plano por frívolo cuando del escrito inicial se advierta una pretensión inalcanzable aun ante una resolución favorable.

En este sentido, se observa que la única pretensión del quejoso es que esta autoridad observe o tenga conocimiento de los eventos de campaña que llevé a cabo durante el período correspondiente y de los gastos inherentes a los mismos. Sin que ello signifique que los gastos fueron reportados.

En este sentido, se pretende hacer del conocimiento de esta autoridad hechos que ya conoce, pues durante el período de campaña desempeñó sus funciones atinentes al monitoreo en redes y a las visitas de verificación de los eventos agenciados en el SIF. Por lo tanto, de obtener una resolución favorable el resultado sería idéntico a lo que se pudiera arrojar en el dictamen consolidado producto de la revisión de los informes de ingresos y de los gastos de campaña correspondiente a mi candidatura.

Finalmente, se considera que a efecto de que la autoridad electoral pueda ejercer su función investigadora es indispensable aportar elementos mínimos de para demostrar la infracción supuestamente cometida, en este caso el rebase al tope de gastos de campaña. No obstante, el quejoso únicamente plasmó sus aseveraciones sin concatenarlas con medios idóneos de prueba y que permitan generar convicción a la autoridad respecto de sus imputaciones.

⁴ Jurisprudencia 15/2018, de rubro: PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.

⁵ Jurisprudencia 33/2002 de rubro FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.

A partir de lo anterior, se observa que estamos frente a las siguientes circunstancias:

1. *Del análisis integral del escrito de queja se observa que el quejoso únicamente se adolece de publicaciones en Facebook que dan cuenta de la celebración de actos de campaña, lo cual no incurre en ninguna infracción a la normativa electoral;*

2. *Imputa y asevera hechos sin presentar medios de prueba idóneos, es decir pretende que el INE ejerza su facultad investigadora a través de un escrito de queja que es evidentemente frívolo, pues parte de una premisa falsa consistente en aseverar que no registré ningún evento en carácter de oneroso;*

3. *Lo anterior sólo evidencia el ánimo de Filemón Ramírez Sánchez de reforzar su narrativa de un supuesto rebase al tope de gastos con el único objetivo de que se anule la elección municipal en San Martín Texmelucan, tratando de hacer pasar por ilícito los actos normales que cualquier candidato lleva a cabo; lo cual sólo entorpece los trabajos de fiscalización por parte de esta autoridad;*

4. *Finalmente, denuncia hechos que no puede probar y que no son competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización, como lo es la supuesta adquisición de tiempos en radio y televisión.*

Solicitamos a esa autoridad electoral que previo a estudiar cualquier situación de fondo, analice que el sustanciar el presente escrito de queja el cual ya se evidenció frívolo podría tener como resultado violentar el principio de mínima intervención de los actos de molestia⁶.

Establecido lo anterior, se argumenta lo siguiente:

B. Los hechos denunciados no representan un ilícito en materia de financiamiento

Como se mencionó en el apartado anterior, Filemón Ramírez Sánchez partiendo de una mentira trata de convencer a la Unidad Técnica de Fiscalización de un supuesto rebase de topes de campaña además de una indebida compra de tiempo de radio y televisión, cuestión que no es competencia de este órgano del INE.

En un primer lugar es pertinente mencionar que Filemón Ramírez Sánchez lleva a cabo un monitoreo de mis redes sociales, las cuales en efecto son un reflejo de la campaña electoral que llevé a cabo y que como se ha mencionado estuvo basada en todo momento en la transparente rendición de cuentas, pues como puede constatar la autoridad se cumplió en tiempo y forma con mis obligaciones en materia de fiscalización, en tanto presenté los informes respectivos:

[Inserta imagen]

Sin embargo, el quejoso tergiversa el contenido de mis redes sociales y duplica gastos como si desconociera cómo se lleva a cabo una campaña electoral y más una con un tope de gastos tan bajo como la que atravesé.

⁶ Sirve a manera de referencia el criterio sostenido en la tesis XVII/2015, de rubro: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA ELECTORAL. PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MINIMA.

Un ejemplo del mal uso de la información que obra en mi cuenta de Facebook es que tuve que usar la misma lona para varios eventos y el quejoso pretende que se contabilice como si hubiera adquirido una lona por cada evento.

Como se observa en el siguiente ejemplo:

[inserta imagen]

La sana crítica y la experiencia indican que una lona de este tipo es fácil de transportar y soporta usos repetidos. Como se observa en las imágenes, la lona de propaganda utilizada en el evento es idéntica, porque es la misma. En este sentido, para efectos de contabilidad, resulta irrazonable que se contabilice un gasto equivalente a la adquisición de dos lonas; siendo que se trata de una única lona utilizada en dos eventos diferentes.

Lo mismo sucede en el caso de la producción de videos y la pauta en Internet. De las imágenes que aporta el mismo quejoso se puede observar que es la misma publicación en la misma fecha, tal y como nuestro a continuación:

[inserta imagen]

Por lo hasta aquí expuesto podemos asegurar que el quejoso lo único que pretende es tratar de engañar a la autoridad electoral, lo anterior a través de la presentación de hechos falsos y de un desconocimiento de la materia electoral, aunado al hecho que no presenta mayores elementos de prueba que las técnicas que expone en el escrito de queja. Las cuales, lo único que demuestran es que coloqué una serie de publicaciones en mi mural de Facebook.

Inclusive, se cae en el absurdo de denunciar la contratación de servicios de seguridad personal -guardaespaldas- a partir de una simple fotografía.

Es necesario mencionar a la Unidad Técnica de Fiscalización que las pruebas técnicas por su naturaleza, es decir, su carácter imperfecto, resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen⁷.

Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. Así, de conformidad con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al dictar sentencia el 5 de octubre de 2017 en el expediente SUP-RAP-184/2017, determinó que se efectuó una debida valoración de las pruebas aportadas con el escrito de queja, dado que no cuenta con algún respaldo fáctico o jurídico el alcance probatorio que el quejoso pretende dar a las fotografías y videos que integran el acervo probatorio de referencia, como en el presente asunto.

⁷ 5 jurisprudencia 4/2014, de rubro: "PRUEBAS TECNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SI SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN".

*Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas resultan insuficientes por sí mismas para acreditar los hechos que se pretenden demostrar, por la facilidad con la que pueden ser manipuladas y la dificultad de advertir cualquier posible alteración. Es por ello por lo que en la referida sentencia se consideró correcto que la autoridad electoral **haya desvirtuado la pretensión del quejoso a partir de señalar la insuficiencia del material probatorio.***

En todo caso, aun de haber otorgado valor probatorio pleno a las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, ello de modo alguno sería suficiente para acreditar los extremos pretendidos, toda vez que lo único que podría demostrarse es que se realizaron diversos eventos, más no que se hubieran contratado los bienes y servicios que el quejoso aduce, ni que se hubieran erogado los supuestos gastos, porque de ninguna forma de las fotografías y videos sería posible advertir tal situación.

Asimismo, cabe recordar que en esta clase de procedimientos la carga de la prueba recae en el quejoso o denunciante, pues es su obligación aportar las pruebas para acreditar los hechos denunciados⁸.

Ha sido criterio de la UTF, declarar infundados los procedimientos en materia de fiscalización cuando el quejoso aporta pruebas técnicas, pues queda evidenciado que por las circunstancias del asunto está imposibilitado en presentar otra que concatenada con la primigenia le permitan demostrar su dicho, tal es el caso de las resoluciones INE/CG593/2015 e INE/CG202/2019.

Por último, me permito mencionar a la Unidad Técnica de Fiscalización que el sustanciar esta queja solo representaría un trabajo doble para dicha autoridad electoral ya que lo denunciado por el quejoso es de por sí materia de la misma revisión se está llevando a cabo respecto del informe de ingresos y gastos que se presentó en su momento, en el cual se puede evidenciar que todas las erogaciones fueron reportadas.

Por otra parte, esta autoridad tampoco advertirá ninguna clase de erogación con el objeto de contratar espacios publicitarios en radio y televisión. Los hechos incluidos en la denuncia que ahora se responde están relacionados con la celebración de entrevistas con medios de comunicación, para las cuales fui debidamente invitada y que forman parte de un ejercicio genuino de libertad de prensa en donde el objeto fue la difusión de información relacionada con mi candidatura a la presidencia municipal, misma que es de interés general de la sociedad.

CONCLUSIONES GENERALES.

1. El escrito de queja es frívolo ya que su premisa principal está basada en hechos falsos y sólo presenta como elementos de prueba fotografías de mis redes sociales, las cuales podrían perfeccionarse únicamente con la aportación de elementos probatorios adicionales.

⁸ 6 Jurisprudencia 12/2010, de rubro: CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.

2. *Las pruebas aportadas son las mismas fotos y videos con las que yo documenté mi campaña electoral en mis propias redes sociales, por lo que no aporta nada que la autoridad no haya podido monitorear y/o verificar;*
3. *Solo aporta pruebas de carácter técnico, las cuales por su naturaleza son imperfectas y resultan insuficientes por sí solas para mostrar un ilícito; y*
4. *Es evidente que la única intención del quejoso es la de robustecer la impugnación que presentó en contra de la elección en la que participé, es decir, esta queja se presentó solo por cumplir o dar mayores elementos a la autoridad jurisdiccional y no con la convicción de evidenciar un ilícito.*

(...)"

XI. Razón y Constancia

- a) El cuatro de julio de dos mil veintiuno se procedió a integrar al expediente, constancia de las fotografías obtenidas de la revisión al perfil de Facebook, de la otrora Candidata denunciada, María Norma Layón Aarum, las cuales coinciden con las pruebas técnicas presentadas por el quejoso. (Fojas 471 a 512 del expediente)
- b) El siete de julio de dos mil veintiuno se procedió a integrar al expediente, constancia de la documentación Soporte que obra en el Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF), correspondiente a los informes de ingresos y gastos de campaña de María Norma Layón Aarum. (Fojas 567 a 572 del expediente).

XII. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

- a) El dos de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/32646/2021, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, en función de Oficialía Electoral, la certificación de la existencia de los links vinculados con videos y eventos denunciados por el quejoso. (Fojas 454 a 458 del expediente).
- b) El nueve de julio de dos mil veintiuno, se recibió el oficio número INE/DS/1951/2021, mediante el cual se informa el acuerdo de admisión del expediente de oficialía electoral INE/DS/OE/425/2021, correspondiente a la solicitud de fe de hechos respecto de las direcciones electrónicas proporcionadas (Fojas 573 a 577 del expediente).

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/909/2021/PUE

XIII. Acuerdo de alegatos. El trece de julio de dos mil veintiuno, una vez realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 41, numeral 1, inciso I) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, acordándose notificar al quejoso y a los sujetos incoados. (Fojas 614 a 615 del expediente).

XIV. Notificación de Acuerdo de alegatos a las partes.

| Sujeto a notificar | Oficio y fecha de notificación | Fecha de respuesta | Fojas |
|---|---|--|-----------|
| Filemón Ramírez Sánchez. Otrora candidato independiente a Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla. | INE/UTF/DRN/34087/2021 14 de julio de 2021 | A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se cuenta con respuesta. | 616 a 622 |
| María Norma Layón Aarum. Otrora candidata a Presidenta Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla. | INE/UTF/DRN/34090/2021 14 de julio de 2021 | A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se cuenta con respuesta. | 623 a 629 |
| MORENA | INE/UTF/DRN/34089/2021 14 de julio de 2021 | 17 de julio de 2021 | 630 a 636 |
| Partido del Trabajo | INE/UTF/DRN/34088/2021 14 de julio de 2021 | A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se cuenta con respuesta. | 637 a 643 |

XV. Cierre de Instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 644 del expediente).

XVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, por votación **unánime** de los

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/909/2021/PUE

Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización; el Consejero Electoral Doctor Uuk-kib Espadas Ancona, la Consejera Electoral Doctora Carla Astrid Humphrey Jordán, el Consejero Electoral Doctor Ciro Murayama Rendón, el Consejero Electoral Maestro Jaime Rivera Velázquez y la Consejera Presidenta Doctora Adriana Margarita Favela Herrera.

Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.

Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento

Por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser examinadas de oficio, se procede a entrar al estudio del presente caso para

determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse, ya que, al existir, sería un obstáculo que impide la válida constitución del proceso e imposibilita un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

Esta autoridad procede a analizar los argumentos realizados por la otrora candidata a Presidenta Municipal de San Martín Texmelucan en Puebla, María Norma Layón Aarum, en el escrito mediante el cual da respuesta al emplazamiento, y donde señala que el escrito de queja presentado en su contra se debe declarar improcedente por la autoridad, ello en virtud de ser una queja frívola que refiere hechos genéricos e imprecisos sin ofrecer medios de convicción, en términos de lo dispuesto en el artículo 30, numeral 1 fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en relación con el artículo 440 numeral 1, inciso e) fracciones I, II, III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Asimismo, señalan que los gastos relacionados con los eventos denunciados, se encuentran debidamente reportados en la contabilidad de la candidata.

Al respecto, sobre las causales de improcedencia invocadas, es de señalarse que la finalidad de los procedimientos sancionadores es la de investigar determinados hechos o conductas que se han denunciado como constitutivas de infracciones a la normativa electoral, a fin de poder establecer, en su caso, si se actualiza la infracción a la norma y junto con ella, la responsabilidad de los sujetos denunciados.

Ahora bien, los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización pueden iniciarse: a) a petición de parte, con la presentación de una queja o denuncia, o bien, b) de manera oficiosa cuando el Consejo General, la Comisión de Fiscalización o la Unidad Técnica de Fiscalización tengan conocimiento de hechos que pudieran configurar una violación a la normativa electoral en materia de fiscalización, de los cuales incluso, pudo haber tenido conocimiento en el procedimiento de revisión de informes de ingresos y gastos.

Asimismo, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece, entre los requisitos que deben cumplirse al presentar un escrito de queja, que los hechos denunciados constituyan un ilícito en materia de fiscalización y el quejoso aporte elementos de prueba, aun con carácter indiciario, que soporten la aseveración, y hacer mención de aquellos que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier autoridad.⁹

⁹ Artículo 29. Requisitos 1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los requisitos siguientes: I. Nombre, firma autógrafa o huella digital del quejoso o denunciante. II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir. III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja. IV.

Por su parte, el artículo 30 del Reglamento en cita, establece las causas de improcedencia de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización.¹⁰

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 29, numeral 1, en relación con el artículo 30, numeral 1, fracción III del Reglamento de Procedimientos, se tiene que, al presentar el escrito de queja el quejoso deberá narrar de forma expresa y clara los hechos en los que basa la queja, precisando circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados y presentar pruebas al menos con valor indiciario.

En consecuencia, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes con carácter de indicios, que presupongan la veracidad de los hechos denunciados los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y destino de los recursos, la autoridad se encuentra constreñida a ejercer sus facultades indagatorias, con la finalidad de verificar que se está ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia fiscalización.

Bajo este contexto, ante el indicio de que los hechos denunciados, aun cuando de forma aparente, puedan vulnerar la normatividad, debe admitirse el procedimiento y llevar a cabo la investigación.

La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados. V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier autoridad. VI. El carácter con que se ostenta el quejoso según lo dispuesto en el presente artículo. VII. Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de los hechos narrados en su escrito inicial de queja. VIII. Adjuntar, preferentemente, en medio magnético el documento de queja y pruebas escaneadas en formato WORD y PDF.

¹⁰ Artículo 30. Improcedencia 1. El procedimiento será improcedente cuando: I. Los hechos narrados en el escrito de queja resulten notoriamente inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable a través de este procedimiento. En la utilización de esta causal no podrán utilizarse consideraciones atinentes al fondo del asunto. II. Los hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo previsto en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General. III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1, fracciones III, IV y V del artículo 29 del Reglamento. IV. La queja sea presentada después de los tres años siguientes a la fecha en que se hayan suscitado los hechos que se denuncian, o que se tenga conocimiento de los mismos. V. La queja se refiera a hechos imputados a los sujetos obligados que hayan sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en materia de fiscalización resuelto por el Consejo y que haya causado estado. VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u órgano que resulte competente para conocer del asunto. VII. El denunciado sea un partido o agrupación política que haya perdido su registro en fecha anterior a la presentación de la queja. VIII. En las quejas relacionadas con un Proceso Electoral, el quejoso aporte como pruebas, únicamente los datos obtenidos por las autoridades electorales como parte del monitoreo de espectaculares y medios impresos, así como en el programa de pautas para medios de comunicación, será determinado, de forma expresa, en el Dictamen y Resolución que recaiga al procedimiento de revisión respectivo. Lo dispuesto en esta fracción no resulta aplicable cuando la queja sea recibida por la Unidad Técnica con posterioridad a la notificación del último oficio de errores y omisiones.

Finalmente, al haberse colmado los requisitos normativos dispuestos por el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización en el escrito de queja presentado por Cesar Galicia Moreno, no podrá declararse la improcedencia del presente asunto, en virtud de que esta autoridad debe realizar juicios de valor acerca de la legalidad de los hechos denunciados por el quejoso, a partir de la ponderación de los elementos que rodean esas conductas y de la interpretación de la ley presuntamente conculcada.

3. Estudio de fondo. Al haberse colmado las cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, se desprende que la litis del presente asunto consiste en determinar si los partidos del Trabajo y MORENA así como su otrora candidata a Presidenta Municipal de San Martín Texmelucan en Puebla, María Norma Layón Aarum, omitieron reportar ingresos o gastos de campaña por artículos para la realización de eventos proselitistas, y, en consecuencia, un probable rebase al tope de gastos de campaña autorizado.

En ese sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, incisos c) y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracciones I y II de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1; 127, numeral 1 y 143 Bis, así como 223, numeral 9, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

(...)

c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente Ley;

(...)

f) Exceder los topes de gastos de campaña;

(...)”

Ley General de Partidos Políticos.

“Artículo 79

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

(...)

b) Informes de Campaña:

- I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;*
- II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior, y*
(...)"

Reglamento de Fiscalización

"Artículo 96.

Control de los ingresos

- 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento."*

"Artículo 127.

- 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad."*

"Artículo 143 Bis.

Control de agenda de eventos políticos

- 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo.*
- 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento."*

"Artículo 223.

Responsables de la rendición de cuentas

- 9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición serán responsables de:*
 - a) Reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña que lleven a cabo."*

De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático, garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, con esta finalidad se ha establecido la obligación a los sujetos obligados de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación.

De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación comprobatoria que soporte el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un sujeto obligado en una situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la contienda electoral.

Así, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a favor de un instituto político o candidatura en específica.

Por ello, se establece la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la obligación de dichos sujetos de reportar con veracidad cada movimiento contable (ya sean ingresos o egresos).

Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable

en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición de ilegítima ventaja respecto del resto de los demás participantes, lo cual resulta inaceptable dentro de un sistema en donde la ley protege los principios de legalidad y equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento.

De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatos sería una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el sujeto obligado una sanción por la infracción cometida.

En ese sentido, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues al establecer un límite a las erogaciones realizadas por los sujetos obligados durante el periodo de campaña, se busca evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los postulados que formulen.

Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que ello pudiera atentar en contra de la libertad del sufragio, por ejercerse indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.

Aunado a lo anterior, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los entes políticos el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora

electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, deberán analizarse, administrarse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.

Ahora bien, previo a entrar al estudio de **fondo** del procedimiento que nos ocupa, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.

El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, César Galicia Moreno, representante propietario del candidato independiente Filemón Ramírez Sánchez ante el Consejo Municipal de San Martín Texmelucan del Instituto Electoral del Estado de Puebla, en contra de la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla”, integrada por los partidos del Trabajo y Morena, así como de María Norma Layón Aarum, otrora candidata al cargo de Presidenta Municipal de San Martín Texmelucan de la citada entidad por probables irregularidades en materia de origen, destino, monto y aplicación de los recursos utilizados por los sujetos incoados.

En este sentido, el quejoso adjuntó a su escrito un testimonio notarial en el que se dio fe de los múltiples enlaces de páginas de Facebook, emitiendo impresiones de fotografías, videos y URL'S de la referida red social, para acreditar su dicho, en las cuales presuntamente se observan eventos en los que participó la candidata denunciada, así como la existencia de propaganda a su favor la cual no fue reportada en el informe de campaña correspondiente.

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/909/2021/PUE**

Por lo que hace al instrumento notarial número 22,998 (veintidós mil novecientos noventa y ocho) emitida por la Notaria Pública número 56 (cincuenta y seis) en Puebla, Puebla en términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tiene valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la veracidad de los hechos que se hicieron constar, al haber sido emitidas por servidores públicos en ejercicio de sus facultades, las cuales no están controvertidas ni existe indicio que las desvirtúe.

Es menester señalar que las pruebas, consistentes en direcciones electrónicas, fotografías y videos, ofrecidas por el quejoso, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de administrarse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario.

Asimismo, el quejoso ofrece los siguientes links certificados del perfil de la red social Facebook, del otrora candidato María Norma Layón Aarum.

| Cons. | Links |
|-------|---|
| 1 | https://www.facebook.com/NormaLayon |
| 2 | https://www.facebook.com/1638544566414065/videos/289783122696407 |
| 3 | https://www.facebook.com/1638544566414065/videos/203262024757377 |
| 4 | https://www.facebook.com/371111709616105/videos/750636425629891 |
| 5 | https://www.facebook.com/1638544566414065/videos/1123036964849353 |
| 6 | https://www.facebook.com/NormaLayon/photos/pcb.28491030753582.02/2849102968691546 |
| 7 | https://www.facebook.com/1638544566414065/videos/384089916101871 |
| 8 | https://www.facebook.com/TextmelucanPalFeis/photos/pcb.934845550391515/934845153724888 |
| 9 | https://www.facebook.com/NormaLayon/photos/a.1640117366256785/2849493251985851/ |
| 10 | https://www.facebook.com/371111709616105/videos/1175696386224991 |
| 11 | https://www.facebook.com/NormaLayon/photos/pcb.2850306201904556/2850306175237892/ |
| 12 | https://www.facebook.com/1638544566414065/videos/890613554819805 |
| 13 | https://www.facebook.com/NormaLayon/?ref=page%20internal |
| 14 | https://www.facebook.com/NormaLayon/photos/pcb.2850306201904556/2851785411756635/ |
| 15 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/812646433007014/ |
| 16 | https://www.facebook.com/NormaLayon/photos/pcb.2851785541756622/2851785445089965/ |
| 17 | https://www.facebook.com/NormaLayon/photos/pcb.2851960691739107/2851960541739122/ |

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/909/2021/PUE

| Cons. | Links |
|-------|---|
| 18 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/1634354240286460 |
| 19 | https://www.facebook.com/NormaLayon/photos/pcb.2853481818253661/2853481701587006/ |
| 20 | https://www.facebook.com/informativoProyecto5/videos/4012794988799366 |
| 21 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/528037474861006 |
| 22 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/3892595150853644 |
| 23 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/1418027465240902 |
| 24 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/475012576944721 |
| 25 | https://www.facebook.com/NormaLayon/photos/pcb.2854790544789455/2854790448122798 |
| 26 | https://www.facebook.com/NormaLayon/photos/a.1640117366256785/2854806974787812/ |
| 27 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/620431302247013 |
| 28 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/374229273964843 |
| 29 | https://www.facebook.com/NormaLayon/photos/a.1640117366256785/2855343511400825/ |
| 30 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/490845212357723 |
| 31 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/807430833216199/ |
| 32 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/1225129684571262/ |
| 33 | https://www.facebook.com/CentralPuebla/videos/317030439901186/ |
| 34 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/784996832377358/ |
| 35 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/134894545356079/ |
| 36 | https://www.facebook.com/InformativoProyecto5/videos/4012794988799366 |
| 37 | https://www.facebook.com/InformativoProyecto5/videos/476826043642610 |
| 38 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/317459396441866/ |
| 39 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/526945855346126/ |
| 40 | https://www.facebook.com/gabrielperozrodriguez2021/videos/922006585012139/ |
| 41 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/1282192632223083 |
| 42 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/498125854973120/ |
| 43 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/337142841359881 |
| 44 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/2860439800834391 |
| 45 | https://www.facebook.com/NormaLayon/photos/a.1640117366256785/2861277197474123 |
| 46 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/501999404258262 |
| 47 | https://www.facebook.com/NormaLayon/photos/pcb.2862178590717317/2862178447383998/ |
| 48 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/383922846255730 |
| 49 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/1243550499435289 |
| 50 | https://www.facebook.com/elsoldepuebla/videos/869311296956502 |
| 51 | https://www.facebook.com/NormaLayon/photos/pcb.2863031563965353/2863031387298704/ |
| 52 | https://www.facebook.com/elsoldepuebla/videos/316924843286669 |
| 53 | https://www.facebook.com/elsoldepuebla/videos/227971635430396 |
| 54 | https://www.facebook.com/NormaLayon/photos/pcb.2863733637228479/2863733563895153/ |
| 55 | https://www.facebook.com/NormaLayon/photos/pcb.2863819827219860/2863819730553203 |

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/909/2021/PUE**

| Cons. | Links |
|-------|---|
| 56 | https://www.facebook.com/elsoldepuebla/videos/327060952149942 |
| 57 | https://www.facebook.com/NormaLayon/photos/pcb.2864696140465562/2864696023798907/ |
| 58 | https://www.facebook.com/NormaLayon/photos/a.1638750073060181/2865051703763339/ |
| 59 | https://www.facebook.com/HoyInformativo/videos/444581139978123 |
| 60 | https://www.facebook.com/NormaLayon/photos/pcb.2865427987059044/2865427887059054/ |
| 61 | https://www.facebook.com/NormaLayon/photos/a.1638750073060181/2865982613670248/ |
| 62 | https://www.facebook.com/HoyInformativo/videos/910597423127905 |
| 63 | https://www.facebook.com/elsoldepuebla/videos/926431104808099 |
| 64 | https://www.facebook.com/elsoldepuebla/videos/4143961852316978 |
| 65 | https://www.facebook.com/NormaLayon/photos/2866547743613735 |
| 66 | https://www.facebook.com/NormaLayon/posts/2866523363616173 |
| 67 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/546093083074749 |
| 68 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/273965484478653 |
| 69 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/343756337171612 |
| 70 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/343756337171612 |
| 71 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/313829343708862 |
| 72 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/177487014291039 |
| 73 | https://www.facebook.com/NormaLayon/videos/982725859135720 |
| 74 | https://www.facebook.com/watch/live/?v=786975078629554&ref=search |
| 75 | https://www.facebook.com/NormaLayon/posts/2868411283427381 |
| 76 | https://www.facebook.com/NormaLayon/posts/2868428070092369 |
| 77 | https://www.facebook.com/NormaLayon/posts/2868451350090041 |
| 78 | https://www.facebook.com/ValkiriaOnLine/videos/227593172191175 |
| 79 | https://www.facebook.com/LDHNoticias/videos/1635468326844058 |
| 80 | https://www.facebook.com/RedInformativaTexmelucan2016/videos/1039013523172586 |
| 81 | https://www.facebook.com/TexmelucanInformativaOficial/videos/145281940990983 |

Respecto a estas pruebas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro “**PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN**”, emitida por dicha autoridad jurisdiccional, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen, por lo que es

necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, para que las puedan perfeccionar o corroborar.

Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y a fin de una adecuada valoración del mismo, se debe realizar una consideración de los hechos investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada acreditan o desvirtúan las conductas involucradas.

En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga respecto de los hechos que la misma involucra, analizados al tenor del entorno en el cual se recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de lo que pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 45/20022, referente a los alcances de las pruebas documentales.¹¹

Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y a fin de una adecuada valoración del mismo, se debe realizar una consideración de los hechos investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada acrediten o desvirtúen las conductas involucradas.

En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga respecto de los hechos que la misma involucra, analizados al tenor del entorno en el cual se recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de lo que pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 45/2002, referente a los alcances de las pruebas documentales.¹²

Así las cosas, del análisis al escrito de queja se advierte que el quejoso únicamente aportó pruebas técnicas, es decir, medios de convicción imperfectos que no contiene información precisa de ubicación de los conceptos referidos, ni tampoco elementos temporales que permitan a esta autoridad tener certeza que los gastos denunciados fueron efectivamente entregados en el marco de la campaña, tampoco era posible mediante las solas direcciones electrónicas proporcionadas, acreditarse un gasto o una infracción en materia de fiscalización, puesto que en las mismas no se advertía información mínima para acreditar los lugares en los que se encontraba la propaganda.

¹¹ 2PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60.

¹² 2PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60.

No obstante lo anterior, maximizando el derecho de acceso a la justicia administrada por órganos del Estado competentes, Unidad Técnica de Fiscalización, el treinta de junio de dos mil veintiuno, acordó la recepción e inicio del expediente en que se actúa, por lo que se inició la tramitación y sustanciación del mismo, desplegando las diligencias que resultaban posibles de los hechos denunciados.

Al respecto, cinco de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio sin número, la autoridad instructora recibió escrito sin número, mediante el Sergio Carlos Gutiérrez Luna en su carácter de Representante del partido MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, remitió respuesta al emplazamiento hecho por esta autoridad quien en lo que interesa manifestó lo siguiente:

“(…)

II.- CONTESTACIÓN DE HECHOS

Ahora bien, aclarada la hipótesis en la que se sustenta la infundada queja, me permito contestar los hechos a partir de lo siguiente:

- 1. Por cuanto hace al hecho número 1 inciso a) y b) del escrito de queja, resultan hechos notorios que no están sujetos a controversia y por tanto no son objeto de pronunciamiento de nuestra parte.*
 - 2. Por cuanto hace al hecho marcado con el número arábigo 2 del escrito de queja que nos ocupa, resultan hechos notorios que no están sujetos a controversia y por tanto no son objeto de pronunciamiento de mi parte.*
 - 3. Por cuanto hace al hecho marcado con el número 3 del escrito de queja que nos ocupa, resultan hechos notorios que no están sujetos a controversia y por tanto no son objeto de pronunciamiento de mi parte.*
 - 4. Por cuanto hace al hecho marcado con el número 4 del escrito de queja, me permito manifestar que es impreciso ya que todos los actos realizados en campaña cumplen los lineamientos de la norma en materia de fiscalización y de ninguna manera se ha rebasado el tope de campaña, aunado a que en todo momento se ha informado de las actividades y gastos generados en la campaña de mis representadas.*
- Aunado a lo anterior, no debe considerarse como un hecho sino como una simple manifestación de la denunciante, por tratarse de asunto diverso que no relaciona objetivamente con el presente asunto, por lo que resultaría ilegal que se tuviera por reproducido algo que no obra en autos del presente expediente, misma que debe ser sustentada con los hechos narrados y no con hechos anteriormente argumentados en el escrito de queja, en razón de que como se*

ha mencionado, se estaría dando pauta a las erróneas apreciaciones del denunciante y no a lo reportado por mis representadas ante esta autoridad. Consecuentemente y toda vez que mis representadas en ningún momento han realizado actos que no hayan sido reportados a la Unidad Técnica de Fiscalización, por ende, la violación denunciada resulta inexistente en razón de que, como se desprende del caudal probatorio ofrecido por la quejosa, no existen elementos suficientes para acreditar que los gastos efectuados por mis representados, sean mayores a los reportados a la autoridad fiscalizadora, por lo tanto carece de sustento probatorio mínimo indispensable para acreditar dicha omisión, resulta aplicable al caso concreto el siguiente criterio jurisprudencial:

CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE- [...]

En ese sentido, es totalmente falso que mis representadas hayan realizado eventos y contrataciones fuera de las normas de fiscalización, como erróneamente lo pretende hacer valer la denunciante de manera osada, realizando aseveraciones de las cuales no aporta elementos probatorios, queriendo sorprender a esta autoridad con argumentos vacíos, carentes de elementos mínimos necesarios para tener certeza sobre la existencia de los hechos denunciados.

*No obstante a que al hoy quejoso le corresponde la carga de la prueba, esta autoridad podrá advertir que las pruebas ofrecidas por la quejosa y con las que pretende acreditar los hechos de su queja, no reúnen los elementos indispensables para considerarse una **prueba técnica**, de conformidad con el artículo 17 punto 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que a la letra dice:*

Artículo 17.

Prueba técnica

...

2. [...]

Lo anterior es así, toda vez que, ni en la queja, ni en el instrumento notarial número veintidós mil novecientos noventa y ocho, del volumen doscientos sesenta, con número de folio veintiún mil seiscientos sesenta y cuatro, tirado ante la Fe de la Licenciada Hilda Torres Gómez, Titular de la Notaría Pública número cincuenta y seis, del Distrito Judicial de Puebla, Puebla; se acredita la descripción de la persona denunciada, en todos y cada uno de los eventos que se denuncian, así como de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos denunciados, por lo que en consecuencia carece de los elementos esenciales para acreditar su dicho, en virtud de que:

- *No cuenta con plena identificación de la denunciada a través de su descripción física detallada.*

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/909/2021/PUE

- *Si bien es cierto refiere las (sic) realización de eventos, no señala con exactitud el lugar en que estos fueron verificados, en que delegación, colonia, y/o barrio.*
- *Es omiso en detallar el modo, es decir cómo se desempeñó el evento y tiempo es decir el momento en cómo se desarrolló el evento.*
- *Ni tampoco acredita con prueba alguna los gastos o rebase que denuncia.*

De lo anterior, es preciso señalar que las aseveraciones vertidas por el quejoso, en su escrito de denuncia, son imprecisas, ya que se basan en mera presunción, omitiendo especificar el o los registros contables que bajo su óptica incurrir en dicha vulneración a la normatividad electoral, por lo que no se actualiza transgresión alguna al marco normativo en materia de fiscalización.

En ese sentido, el quejoso no adjunta algún elemento probatorio, incluso de carácter indiciario, que permita acreditar la veracidad de la presunta aportación o gastos denunciados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, numeral 1, fracción V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización que refiere:

Artículo 29.

Requisitos

[...]

De conformidad con el dispositivo legal transcrito, se deriva que es obligación por parte de los promoventes el ofrecer las pruebas o indicios con que cuente; es decir, todos aquellos elementos que permitan el conocimiento de los hechos motivo de inconformidad. En el caso que nos ocupa el quejoso no aportó alguna respecto a los gastos que denuncia, por tanto, no existió indicio que pudiera ser relacionado con estos: es decir, no hay elemento alguno que permita tener certeza de la existencia de que mis representados hayan realizado gastos no reportados.

En otro contexto, es inverosímil que el quejoso pretenda hacer creer a esta autoridad que las personas que asisten a los eventos y/o actos de campaña, utilizando cualquier medio de transporte; realizan aportaciones por asistir en vehículos o algún otro medio de transporte; pues participan en los eventos, en uso de sus derechos político electorales, así como de su propia libertad de circulación y tránsito, por lo que es improcedente lo manifestado por el hoy quejoso, ya que no aporta elementos de que la participación de las personas que refiere en cada una de sus relaciones fuera de manera onerosa, es decir que existiera un pago, o en su caso, aportación por el uso de los medios de transporte utilizados, de ahí lo improcedente de la queja que nos ocupa.

Del análisis al escrito de queja se observa que Cesar Galicia Moreno, representante propietario del candidato independiente Filemón Ramírez Sánchez, señala presuntos gastos de campaña derivados de diversos eventos; sin embargo, no proporciona prueba alguna respecto a dichos gastos, ni aporta

elementos que permitan presuponer la veracidad de estos, tales como identificación de las personas que participaron en los mismo o que recibieron apoyos económicos o en especie por su participación, que supongan un gasto excesivo de campaña.

En ese sentido, esta representación insiste en que es obligación del quejoso ofrecer las pruebas o indicios con que cuente; es decir, todos aquellos elementos que permitan el conocimiento de los hechos motivo de inconformidad. En el caso que nos ocupa el quejoso no aporta prueba alguna respecto a los gatos que denuncia, por tanto, no existe indicio que pueda ser relacionado con estos; es decir, no hay elemento alguno que permita tener certeza respecto a la existencia de que la parte denunciada haya realizado gastos que refiere.

En ese sentido, las pruebas técnicas que ofrece el quejoso adolecen de eficacia probatoria necesaria a efectos de tener por acreditados los conceptos denunciados, por lo que carecen del grado de convicción necesario a fin de tener por acreditarlos los extremos de la denuncia.

*En consecuencia de lo anterior, desde este momento solicitamos no sea vulnerada la esfera jurídica de mis representadas y en todo momento se tutele el principio concerniente a la presunción de inocencia, ya que de lo controvertido en el proceso en el que se actúa y toda vez que con lo investigado por esta misma autoridad electoral, no se constituye la posibilidad de poder fijar responsabilidad alguna con carácter de resultado material a mi representado. Aunado a que la Carta Magna, establece la presunción de inocencia, como derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de derecho humano fundamental que posee eficacia en su doble aspecto, pues por una parte opera en las situaciones extraprocesales y constituye un derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o participe de los hechos de carácter delictivo **o análogos**, y por otro lado, este derecho opera con el flujo decisivo en el régimen jurídico de la prueba, esto es que debe prevalecer la presunción de inocencia sobre mi representada, respecto de los hechos denunciados por la quejosa, toda vez que no se demostró la existencia de responsabilidad alguna.*

(...)

Por otra parte, y en cuanto al argumento vertido por la denunciante referente a que los reportes se han realizado de manera incompleta, imprecisa y extemporánea; como ya se ha mencionado con antelación la misma no aporta medios de prueba que sustenten sus argumentos subjetivos que comprueben dicho extremo, ahora bien, por cuanto hace a la extemporaneidad me permito manifestar que el poder judicial ha otorgado a nuestro Estado de Derecho una tesis jurisprudencial, que se ajusta al caso concreto; no omitiendo mencionar que en ningún momento se pretenden que la tesis jurisprudencial que a continuación se cita, sea considerado el

criterio de la tesis que emite el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que se ajusta al caso concreto.

OBLIGACIÓN FISCAL. SU CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO ES ESPONTÁNEO, MIENTRAS LA AUTORIDAD NO NOTIFIQUE AL CONTRIBUYENTE LA INFRACCIÓN DESCUBIERTA- [...]

Es importante señalar que, del escrito de queja presentado por Cesar Galicia Moreno, representante propietario del candidato Independiente Filemón Ramírez Sánchez, se desprende que en la misma manifiesta lo siguiente:

“...se tiene la presunción de que se ha omitido reportar gastos...”

Ahora bien, es inverosímil que la parte denunciante quiera sorprender a la autoridad pretendiendo sustentar la queja presentada en contra de mi representado en menos presunciones personales sin carga probatoria alguna y no en hechos comprobados.

Como se mencionó, si bien es cierto el quejoso presentó como medio de prueba diversas fotografías impresas, las que coinciden con las aportadas en medio magnético y prueba técnica, de las cuales se tienen por ciertos los eventos, no menos cierta es también, que estas per se no acreditan el gasto denunciado y/o rebase de gastos de campaña, por lo que deberán desestimarse en los términos supra indicados.

*Por lo que solicito atentamente a esta Unidad Técnica de Fiscalización se sirva declarar **infundada** la queja y el procedimiento en que se actúa, en tanto que ha quedado acreditado que la pretensión de la denunciante parte de una argumentación equivoca con premisas erróneas, adicional a que los hechos que denuncia no constituyen, por sí mismos, algún ilícito en materias de fiscalización.*

Aunado a que, de que las pruebas ofrece en su escrito inicial son también insuficientes e ineficaces para acreditar los extremos de sus afirmaciones, en los términos que han sido señalados a lo largo del presente libelo.

*Finalmente, a fin de acreditar la falsedad de los hechos injustamente atribuidos a mis representados Coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla” integrada por los Partidos del Trabajo y Morena, así como de María Norma Layon Aarum, candidata a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Estado de Puebla, y tomando en consideración que es un principio general del derecho el que los **hechos negativos están exentos de probarse (la no realización de gastos de campaña)**, se ofrecen las siguientes:*

(...)”

Asimismo, se encuentra agregado al expediente, escrito sin número, mediante el cual Pedro Vásquez González en su carácter de Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, contesta los hechos que se le imputan, manifestando lo siguiente:

“(…)

No obstante lo anterior, ad cautelam se manifiesta lo siguiente:

- b) En términos del convenio de coalición, la candidatura de la presidencia municipal de San Martín Texmelucan fue asignada al partido MORENA.*
- c) En el mismo sentido, se hace notar que, en términos del convenio de coalición, el órgano encargado de realizar los informes de ingresos y gastos se encuentran a cargo de MORENA por lo cual toda la información contable se encuentra en poder del referido instituto político.*
- d) Con relación a todas y cada una de las presuntas omisiones de reporte de gastos de campaña o el presunto rebase de tope de gastos de campaña, esta autoridad debe tener en cuenta que el denunciante realiza afirmaciones vagas, genéricas e imprecisas que no logran acreditar de forma fehaciente circunstancias de modo, tiempo y lugar, además de que carecen de sustento probatorio de ahí que deban declararse infundados sus conceptos de vulneración.*
- e) Respecto a todos y cada uno de los gastos que el denunciante califica como “gastos por contratación en medio de comunicación” se niega cualquier tipo de gasto de esa naturaleza dado que todas y cada una de las entrevistas que refiere el denunciante, fueron realizadas en el marco de libre ejercicio de labor periodística, misma que goza de un manto protector especial salvo prueba en contrario y, en el caso que nos ocupa, el denunciante se limita a afirmar lisa y llanamente que la otra (sic) candidata realizó gastos por contratación en medios de comunicación sin que en la especie ofrezca o aporte prueba alguna, de ahí que se solicite a esta autoridad administrativa electoral declarar infundados todos y cada uno de los presuntos gastos por “contratación en medios de comunicación.*
- f) Por cuanto hace a todos y cada uno de los videos que el denunciante reporta como “producción de videos profesionales” esta autoridad debe advertir que tal aseveración resulta falsa pues del análisis del contenido se observa que se trata de videos caseros, sin que contengan características para ser catalogados como “profesionales”, aunado a lo anterior, es inconcuso que para acreditar la calidad de “videos profesionales”, el denunciante no ofrece ni aporta prueba alguna sino que se limita a realizar afirmaciones subjetivas. En razón de lo anterior, se concluye que el “gasto de producción” de todos y cada uno de los videos calificados con un monto de \$5 800 atribuido de*

manera subjetiva por el denunciante es infundado pues se trata de videos caseros cuyo gasto no asciende al monto que refiere el denunciante.

Objeción a pruebas

Con relación a todos y cada uno de los presuntos hechos y omisiones imputados al candidato, se niegan en su totalidad, respecto a las pruebas ofrecidas para probar el dicho del denunciante, se objeta el valor y alcance probatorio de los mismos ya que se trata de pruebas técnicas, mismas que por su propia naturaleza resulta imperfectas, aunado a lo anterior, es inconcuso que la propia Sala Superior ha determinado que tratándose de pruebas técnicas, el oferente se encuentra obligado a describir de forma pormenorizada y específica las circunstancias de modo, tiempo y lugar que pretende acreditar, lo cual evidentemente incumplió.

*En razón de lo anterior, se niegan en su totalidad los presuntos hechos, omisiones o conductas reprochables que refiere el denunciante.
(...)*

*De igual manera, es evidente que el denunciante **no menciona de manera específica el contenido exacto de sus pruebas o lo que pretende acreditar con cada una**, por lo que incumple con los criterios establecidos por las Sala Superior contenidos en la jurisprudencia 36/2014 con el rubro PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS Y CIRCUNTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.*

En ningún momento la quejosa menciona las circunstancias concretas de modo tiempo y lugar relacionadas con las pruebas que ofrece y aporta, de ahí que se arribe a la conclusión de que debe declararse infundado el presente procedimiento sancionador en contra de mi representado, pues se trata de afirmaciones vagas, genéricas e imprecisas que no encuentran soporte probatorio en pruebas documentales idóneas, y suficientes.

Así, al no describir con precisión las circunstancias de modo, tiempo y lugar y la forma en que presuntamente se relacionan con las pruebas que ofrece y aporta, el denunciante incumple con la carga prevista en el artículo 29 numeral I fracción IV y V del Reglamento y en consecuencia no aporta elementos suficientes que hagan verosímil la versión de su denuncia,

*En tales circunstancias, se solicita a esta autoridad fiscalizadora declarar infundados los conceptos de violación alegados por el denunciante, lo anterior atentos a las siguientes tesis de jurisprudencia:
(...)*

OBJECCIÓN A TODAS Y CADA UNA DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS Y APORTADAS: desde este momento se objeta el valor y alcance probatorios de todas y cada una de las pruebas ofrecidas y aportadas, dado que se trata de:

- a) **Fotografías y videos**, de las cuales nos deslindamos y al ser pruebas técnicas que pueden ser fácilmente manipulables, y alterables, además de que no se acreditan de manera fehaciente circunstancias de modo, tiempo y lugar, no existe nitidez en su contenido, por lo que evidentemente no puede tener el valor y alcance probatorio que pretende el accionante **en términos del artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización**, son insuficientes para generar valor convictivo en los términos en que pretende el quejoso.

En el caso, aun cuando el quejoso tiene la carga de la prueba no acredita los extremos de sus afirmaciones siendo que se debe acreditar su pretensión de manera objetiva y material, lo cual no logra en virtud de que sus medios de prueba resultan ser insuficientes, ineficaces y no idóneos.

Por cuanto hace a todas y cada una de las pruebas ofrecidas y aportadas por el quejoso, se reitera que las mismas son genéricas, vagas e imprecisas y más aún, resultan total y absolutamente subjetivas pues hace referencia a presuntas fotografías y videos **sin que establezca con precisión las circunstancias de modo, tiempo y lugar.**

Por lo que los medios de pruebas ofertados no pueden tener los alcances ni la eficacia probatoria que pretende atentos a la jurisprudencia:

4/2014 Jurisprudencia PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN- [...]

36/2014

Jurisprudencia

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR- [...]

En tales circunstancias, en el caso que nos ocupa, resulta evidente que el presunto rebase de tope de gastos de campaña que argumenta **no cumple con los parámetros de objetividad**, habida cuenta que de todas y cada una de las afirmaciones y argumentos del accionante, tienen como base el propio criterio del enjuiciante, su discrecionalidad y subjetividad, muestra de ello es que **ofrece como probanzas**, (diversas imágenes), constituyen meras apreciaciones subjetivas, afirmaciones unilaterales, vagas, genéricas e imprecisas.

Con relación al supuesto rebase de tope de gastos de campaña, se hace notar a esta autoridad que tal concepto de vulneración se encuentra soportada en afirmaciones subjetivas del quejoso dado que de forma discrecional (sic) y arbitraria y pretende atribuir de manera dolosa presuntos gastos de campaña sin que en la especie soporte su dicho en pruebas plenas, fehacientes e indubitables.

Por los razonamientos y argumentos expresados con anterioridad, se reitera que en la especie, no existe vulneración a la normatividad electoral en materia de fiscalización por parte del Partido del Trabajo o de la candidata denunciada, por lo que se solicita a este órgano administrativo electoral resolver infundado el presente procedimiento.

*A fin de acreditar lo anterior, ofrecemos las siguientes pruebas:
(...)"*

En tanto, se encuentra agregado al expediente, escrito sin número, mediante el cual María Norma Layón Aarum, otrora candidata a Presidenta Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, presentó desahogo al emplazamiento, manifestando lo siguiente:

"(...)

Desahogo del emplazamiento

Del análisis al escrito de queja presentado por Filemón Ramírez Sánchez, se desprende la pretensión de tergiversar los hechos acontecidos alrededor de mi campaña electoral, la cual se realizó en todo momento conforme al principio de transparencia en la rendición de cuentas, siendo ánimo del actor el engañar a la autoridad electoral a efecto de conseguir fines personales.

*Esta afirmación encuentra sustento en el hecho que Filemón Ramírez Sánchez parte de una premisa falsa para estructurar su escrito de queja, **pues afirma que todos mis eventos fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización como «no onerosos»¹³**, lo cual en la especie no aconteció.*

Expuesto lo anterior, daré respuesta a argumentos expuestos por el quejoso, de manera que, por cuestiones de practicidad en el el (sic) estudio del presente asunto y a efecto de presentar argumentos con mayor claridad, el desahogo se dividirá en los siguientes apartados:

A. Evidente frivolidad del escrito de queja.

B. Los hechos denunciados no representan un ilícito en materia de financiamiento.

¹³ Página 4 del escrito de queja

A. Evidente frivolidad del escrito de queja.

Los argumentos expuestos en el escrito inicial de queja son confusos ya que no es posible considerar que exista conducta alguna que sea reprochable por la norma electoral, pues refieren a hechos genéricos e imprecisos, de manera que es oportuno retomar el principio general del derecho «quien afirma se encuentra obligado a probar» y el quejoso se limita a hacer una serie de imputaciones sin ofrecer medios de convicción ni razones suficientes para sostener su dicho, por lo que la presente queja debió declararse improcedente por ser frívola en términos de lo dispuesto en el artículo 30, numeral 1 fracción 11 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en relación al artículo 440 numeral 1, inciso e) fracciones 1, 11, 111, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que los hechos mencionados no son por sí mismos violatorios de ninguna disposición en materia de fiscalización electoral.

*De igual manera, se advierte el carácter frívolo del escrito de queja a partir de que su pretensión jurídica es inalcanzable pues tiene como premisa principal un hecho falso, consistente en que supuestamente todos los eventos de campaña fueron reportados como **no onerosos** ante la autoridad fiscalizadora. A partir de lo cual, supone que hace del conocimiento de esta autoridad gastos no reportados y que no coinciden con la agenda informada en el SIF. Lo cual es, cuando menos, impreciso o incorrecto tal y como puedo evidenciar a continuación:*

[Inserta imagen]

Con el objetivo de engañar a la autoridad a través de la denuncia de hechos falsos y tergiversados, Filemón Ramírez Sánchez presentó la misma liga de Internet antes exhibida asegurando en la página 4 de su escrito que yo no había reportado ni un evento de carácter oneroso, pero que mis redes sociales evidencian un gasto que puede representar el rebase de topes de campaña.

Como quedó evidenciado, la columna vertebral del escrito de denuncia no encuentra ninguna clase de sustento fáctico o jurídico, pues se reportaron ante esta autoridad 78 eventos de carácter oneroso.

Por lo que hace a sus medios de prueba, las imágenes obtenidas de mis propias redes sociales de publicaciones que se encuentran ahí alojadas, de ninguna manera aportan elementos para demostrar la celebración de eventos no reportados o la efectuación de gastos no incluidos en los informes respectivos. Lo único que prueban es lo que yo misma hice público a través de mi cuenta en la red social Facebook y que pudo ser revisado por esta autoridad en ejercicio de sus facultades de verificación y monitoreo.

Ahora bien, si la premisa que sostiene el argumento toral de la denuncia es falsa, entonces nos encontramos ante la causal de improcedencia referida a que "Los hechos narrados en la denuncia resulten notoriamente inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable a

través de este procedimiento". En este sentido, la queja debió considerarse improcedente con fundamento en el el (sic) artículo 30, numeral 1, inciso a).

Aunado a lo anterior, Filemón Ramírez García afirma que se llevaron a cabo gastos por adquisición de tiempos en radio y televisión, lo cual solo sostiene a través de pruebas técnicas y no así de documentales que puedan comprobar la erogación.

Esto último porque no en ningún momento sucedió dicha compra o trato con radiodifusora o concesionaria, por lo que afirmamos que el quejoso una vez más está denunciando hechos falsos.

Por otra parte, esta autoridad debe considerar que los eventos denunciados, por tratarse de entrevistas frente a medios de comunicación, gozan de una especial protección como ejercicios genuinos del derecho a la libertad de prensa¹⁴. Afirmar que se contrataron tiempos de radio o televisión por la celebración y difusión de entrevistas celebradas frente a periodistas supone para quien lo hace un estándar probatorio alto y reforzado, pues implica demostrar que no fue el resultado de un genuino esfuerzo para la difusión de ideas o de información del interés general, sino un mutuo acuerdo para favorecer a una de las partes con un posicionamiento electoral indebido.

*Ahora bien, la Sala Superior ha señalado que se entienden como frívolas las demandas o promociones en las cuales **se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente**, por ser notorio o evidente que no se encuentran al amparo del derecho¹⁵.*

La posibilidad de desechar un procedimiento, juicio o medio de impugnación por su frivolidad no restringe el derecho de acceso a la justicia, pues la finalidad de esta previsión es la de reprimir que las partes procesales presenten escritos o promociones con la única finalidad de dilatar los procesos o desgasten el actuar de la autoridad al abocarlas al estudio de pretensiones cuya consecución es jurídicamente inalcanzable.

La frivolidad se puede estudiar a partir de la pretensión o petición de la parte actora. En otras palabras, a partir del resultado que pretende conseguir a través de la reparación del agravio que estima fundado. Por lo cual un medio de impugnación en materia electoral deberá desecharse de plano por frívolo cuando del escrito inicial se advierta una pretensión inalcanzable aun ante una resolución favorable.

En este sentido, se observa que la única pretensión del quejoso es que esta autoridad observe o tenga conocimiento de los eventos de campaña que llevé a cabo durante el período correspondiente y de los gastos inherentes a los mismos. Sin que ello signifique que los gastos fueron reportados.

¹⁴ Jurisprudencia 15/2018, de rubro: PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.

¹⁵ Jurisprudencia 33/2002 de rubro FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.

En este sentido, se pretende hacer del conocimiento de esta autoridad hechos que ya conoce, pues durante el período de campaña desempeñó sus funciones atinentes al monitoreo en redes y a las visitas de verificación de los eventos agenciados en el SIF. Por lo tanto, de obtener una resolución favorable el resultado sería idéntico a lo que se pudiera arrojar en el dictamen consolidado producto de la revisión de los informes de ingresos y de los gastos de campaña correspondiente a mi candidatura.

Finalmente, se considera que a efecto de que la autoridad electoral pueda ejercer su función investigadora es indispensable aportar elementos mínimos de para demostrar la infracción supuestamente cometida, en este caso el rebase al tope de gastos de campaña. No obstante, el quejoso únicamente plasmó sus aseveraciones sin concatenarlas con medios idóneos de prueba y que permitan generar convicción a la autoridad respecto de sus imputaciones. A partir de lo anterior, se observa que estamos frente a las siguientes circunstancias:

1. Del análisis integral del escrito de queja se observa que el quejoso únicamente se adolece de publicaciones en Facebook que dan cuenta de la celebración de actos de campaña, lo cual no incurre en ninguna infracción a la normativa electoral;

2. Imputa y asevera hechos sin presentar medios de prueba idóneos, es decir pretende que el INE ejerza su facultad investigadora a través de un escrito de queja que es evidentemente frívolo, pues parte de una premisa falsa consistente en aseverar que no registré ningún evento en carácter de oneroso;

3. Lo anterior sólo evidencia el ánimo de Filemón Ramírez Sánchez de reforzar su narrativa de un supuesto rebase al tope de gastos con el único objetivo de que se anule la elección municipal en San Martín Texmelucan, tratando de hacer pasar por ilícito los actos normales que cualquier candidato lleva a cabo; lo cual sólo entorpece los trabajos de fiscalización por parte de esta autoridad;

4. Finalmente, denuncia hechos que no puede probar y que no son competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización, como lo es la supuesta adquisición de tiempos en radio y televisión.

Solicitamos a esa autoridad electoral que previo a estudiar cualquier situación de fondo, analice que el sustanciar el presente escrito de queja el cual ya se evidenció frívolo podría tener como resultado violentar el principio de mínima intervención de los actos de molestia¹⁶.

Establecido lo anterior, se argumenta lo siguiente:

B. Los hechos denunciados no representan un ilícito en materia de financiamiento

Como se mencionó en el apartado anterior, Filemón Ramírez Sánchez partiendo de una mentira trata de convencer a la Unidad Técnica de

¹⁶ Sirve a manera de referencia el criterio sostenido en la tesis XVII/2015, de rubro: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA ELECTORAL. PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MINIMA.

Fiscalización de un supuesto rebase de topes de campaña además de una indebida compra de tiempo de radio y televisión, cuestión que no es competencia de este órgano del INE.

En un primer lugar es pertinente mencionar que Filemón Ramírez Sánchez lleva a cabo un monitoreo de mis redes sociales, las cuales en efecto son un reflejo de la campaña electoral que llevé a cabo y que como se ha mencionado estuvo basada en todo momento en la transparente rendición de cuentas, pues como puede constatar la autoridad se cumplió en tiempo y forma con mis obligaciones en materia de fiscalización, en tanto presenté los informes respectivos:

[Inserta imagen]

Sin embargo, el quejoso tergiversa el contenido de mis redes sociales y duplica gastos como si desconociera cómo se lleva a cabo una campaña electoral y más una con un tope de gastos tan bajo como la que atravesé.

Un ejemplo del mal uso de la información que obra en mi cuenta de Facebook es que tuve que usar la misma lona para varios eventos y el quejoso pretende que se contabilice como si hubiera adquirido una lona por cada evento.

Como se observa en el siguiente ejemplo:

[inserta imagen]

La sana crítica y la experiencia indican que una lona de este tipo es fácil de transportar y soporta usos repetidos. Como se observa en las imágenes, la lona de propaganda utilizada en el evento es idéntica, porque es la misma. En este sentido, para efectos de contabilidad, resulta irrazonable que se contabilice un gasto equivalente a la adquisición de dos lonas; siendo que se trata de una única lona utilizada en dos eventos diferentes.

Lo mismo sucede en el caso de la producción de videos y la pauta en Internet. De las imágenes que aporta el mismo quejoso se puede observar que es la misma publicación en la misma fecha, tal y como muestro a continuación:

[inserta imagen]

Por lo hasta aquí expuesto podemos asegurar que el quejoso lo único que pretende es tratar de engañar a la autoridad electoral, lo anterior a través de la presentación de hechos falsos y de un desconocimiento de la materia electoral, aunado al hecho que no presenta mayores elementos de prueba que las técnicas que expone en el escrito de queja. Las cuales, lo único que demuestran es que coloqué una serie de publicaciones en mi mural de Facebook.

Inclusive, se cae en el absurdo de denunciar la contratación de servicios de seguridad personal -guardaespaldas- a partir de una simple fotografía.

Es necesario mencionar a la Unidad Técnica de Fiscalización que las pruebas técnicas por su naturaleza, es decir, su carácter imperfecto, resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen¹⁷.

¹⁷ 5 jurisprudencia 4/2014, de rubro: "PRUEBAS TECNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SI SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN".

Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser administradas, que las puedan perfeccionar o corroborar. Así, de conformidad con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al dictar sentencia el 5 de octubre de 2017 en el expediente SUP-RAP-184/2017, determinó que se efectuó una debida valoración de las pruebas aportadas con el escrito de queja, dado que no cuenta con algún respaldo fáctico o jurídico el alcance probatorio que el quejoso pretende dar a las fotografías y videos que integran el acervo probatorio de referencia, como en el presente asunto.

*Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas resultan insuficientes por sí mismas para acreditar los hechos que se pretenden demostrar, por la facilidad con la que pueden ser manipuladas y la dificultad de advertir cualquier posible alteración. Es por ello por lo que en la referida sentencia se consideró correcto que la autoridad electoral **haya desvirtuado la pretensión del quejoso a partir de señalar la insuficiencia del material probatorio.***

En todo caso, aun de haber otorgado valor probatorio pleno a las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, ello de modo alguno sería suficiente para acreditar los extremos pretendidos, toda vez que lo único que podría demostrarse es que se realizaron diversos eventos, más no que se hubieran contratado los bienes y servicios que el quejoso aduce, ni que se hubieran erogado los supuestos gastos, porque de ninguna forma de las fotografías y videos sería posible advertir tal situación.

Asimismo, cabe recordar que en esta clase de procedimientos la carga de la prueba recae en el quejoso o denunciante, pues es su obligación aportar las pruebas para acreditar los hechos denunciados¹⁸.

Ha sido criterio de la UTF, declarar infundados los procedimientos en materia de fiscalización cuando el quejoso aporta pruebas técnicas, pues queda evidenciado que por las circunstancias del asunto está imposibilitado en presentar otra que concatenada con la primigenia le permitan demostrar su dicho, tal es el caso de las resoluciones INE/CG593/2015 e INE/CG202/2019.

Por último, me permito mencionar a la Unidad Técnica de Fiscalización que el sustanciar esta queja solo representaría un trabajo doble para dicha autoridad electoral ya que lo denunciado por el quejoso es de por sí materia de la misma revisión se está llevando a cabo respecto del informe de ingresos y gastos que se presentó en su momento, en el cual se puede evidenciar que todas las erogaciones fueron reportadas.

¹⁸ 6 Jurisprudencia 12/2010, de rubro: CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE .

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/909/2021/PUE

*Por otra parte, esta autoridad tampoco advertirá ninguna clase de erogación con el objeto de contratar espacios publicitarios en radio y televisión. Los hechos incluidos en la denuncia que ahora se responde están relacionados con la celebración de entrevistas con medios de comunicación, para las cuales fui debidamente invitada y que forman parte de un ejercicio genuino de libertad de prensa en donde el objeto fue la difusión de información relacionada con mi candidatura a la presidencia municipal, misma que es de interés general de la sociedad.
(...)”*

Dichos escritos constituyen **pruebas documentales privadas** que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

El cuatro de junio de dos mil veintiuno se procedió a levantar razón y constancia del contenido de las direcciones electrónicas ofrecidas por el quejoso que conducía a diversas imágenes y videos en el perfil de Facebook de la otrora Candidata denunciada, María Norma Layón Aarum, las cuales coinciden con las pruebas técnicas presentadas por el quejoso.

El siete de julio de dos mil veintiuno se procedió a integrar razón y, constancia de la documentación Soporte que obra en el Sistema Integral de Fiscalización, correspondiente a los informes de ingresos y gastos de campaña de María Norma Layón Aarum y que guardan relación y relevancia con los conceptos denunciados en el escrito de queja.

Las razones y constancias realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización constituyen **documentales públicas** en términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las cuales tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieran, al ser emitidas por servidores públicos en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas y de las cuales en el expediente no existe indicio que las desvirtúe.

Cabe mencionar que las anteriores disponen de un valor probatorio pleno sobre aquello a lo que se refieren, obra y se encuentra plasmado en el contenido de las

mismas, siendo este el caso de las diligencias realizadas por esta autoridad electoral fiscalizadora en las razones levantadas, la certificación hecha por la oficialía electoral de la Dirección del Secretariado así como el instrumento notarial presentado por el quejoso, las cuales certifican la existencia de la mayor parte de las direcciones electrónicas citadas en el escrito de queja.

Ahora bien, es dable aclarar que el Acta de fe pública presentada en el escrito de queja, así como las diversas diligencias realizadas por esta Unidad **certifican la existencia de los videos en la red social denominada Facebook, no así los gastos que en dichos medios se observan, los lugares donde se realizaron los eventos o las fechas de los mismos.**

Esto es así porque el funcionamiento de las redes sociales tiene dinámicas intrínsecas a las tecnologías digitales de la comunicación que permiten una consulta global y atemporal del contenido. Aunado a esto, las redes sociales permiten y fomentan la publicación de contenido en fechas y horarios distintos al que sucede. Incluso permitiendo programar publicaciones en fechas específicas o simplemente subir y publicar contenido independientemente del momento de su grabación o captura.

Por lo anterior, sería un error de razonamiento partir de la premisa de que la veracidad de la existencia de los videos en una red sociodigital hace ciertas las afirmaciones que se puedan hacer sobre su contenido, más aún sobre las circunstancias que sucedieron en el momento de captura o grabación del mismo.

Lo que se tiene por cierto es la existencia y contenido de los links, así como su fecha de publicación, más no los posibles gastos que a dicho del quejoso son atribuibles a los sujetos investigados, que como tal, constituyen pruebas técnicas que se tendrían que perfeccionar con la concatenación de otros elementos de convicción.

Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito.

Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de la autoridad electoral.

El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes:

APARTADO A. GASTOS DENUNCIADOS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN.

APARTADO B. GASTOS NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN, SIN EMBARGO, NO FUERON ACREDITADOS.

APARTADO C. REBASE DE TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA.

Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados correspondientes.

APARTADO A. GASTOS DENUNCIADOS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN.

La Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diligencias con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir de los indicios aportados a través del acta notarial integrada al escrito de queja, entre las que destaca, la consulta a las direcciones electrónicas que proporcionó el quejoso, en la que se apreció la existencia de las probanzas técnicas de referencia, sin que se obtuvieran los datos de ubicación de la colocación de la propaganda o de la celebración de los eventos.

En ese mismo sentido, entre las diligencias que la Unidad realizó para dotar de certeza la conclusión a que se llega, en aras de agotar el principio de exhaustividad, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar los gastos del instituto político, así como de la entonces candidata incoada, se consultó el Sistema Integral de Fiscalización, de lo anterior se obtuvieron los resultados que se describen a continuación.

Así, del análisis a la documentación encontrada en el SIF se advirtió lo siguiente:

| ID | Artículos o servicios denunciados | Conceptos denunciados | Concepto registrado | Póliza | Documentación soporte |
|----|--------------------------------------|---|--|--|---|
| 1 | Artículos y utilitarios para eventos | Sillas Templete Mesas Manteles Carpa Cubremanteles Banderas | Banderas Microperforados Vinilonas (carpas) Lonas Playeras Gorras Bolsas | Póliza normal, diario, número 14, periodo 1 Póliza normal, diario, número 18, periodo 1 | Factura folio fiscal: 0D875ED2-6863-4A3B-8D79-51DEFBF5CE6B Recibo de transferencia interna. (prorratio) Contrato |

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/909/2021/PUE

| ID | Artículos o servicios denunciados | Conceptos denunciados | Concepto registrado | Póliza | Documentación soporte |
|----|---|---|---|--|--|
| | | Playeras Lonas | Sillas Templete Manteles mesas | Póliza normal, diario, número 25, periodo 1 Póliza normal, diario, número 26, periodo 1 Póliza normal, diario, número 30, periodo 1 Póliza normal, diario, número 31, periodo 1 | Factura folio fiscal: 38D888F8-D282-4F80-9FC6-BC5AD2F199E7 (prorrato) Factura folio fiscal: CDD1683B-EE9B-42FF-9D92-50F1204278D1 (prorrato) Factura folio fiscal: 0CF910C8-72D5-484A-9211-B5E6DCD0E9FB Imágenes de los artículos (prorrato) Concentrado de eventos COA Factura folio fiscal: 0C7EBB4E-A66F-4E27-9D00-AB899946B7AB Concentrado con detalle de eventos de coalición Imágenes de artículos |
| 2 | Equipo de sonido | Micrófono Tornamesa Bocinas | Sonido Micrófono Música Bocina | Póliza normal, diario, número 30, periodo 1 | Concentrado de eventos COA |
| 3 | Grupo musical | Banda y grupo de música | Banda musical Cantante en San Martín | Póliza normal, diario, número 33, periodo 1 Póliza normal, diario, número 30, periodo 1 | Concentrado de eventos COA |
| 4 | Publicidad y producción de video y foto | Edición de videos Cámaras Fotografías, edición fotográfica, Marketing y anuncios multimedia | Diseño gráfico, Marketing, edición de videos y spots. | Póliza normal, diario, número 16, periodo 1 Póliza normal, diario, número 27, periodo 1 Póliza normal, diario, número 28, periodo 1 Póliza normal, diario, número 2, periodo 1 | Factura folio fiscal: A7ADD024-4AF2-4D52-8F62-01E4E426A2E7 Constancia activa en Registro Nacional de Proveedores. Imágenes y videos muestra. Factura folio fiscal B992B6A5-D359-4F0E-9F22-52158286A8BF Constancia activa en Registro Nacional de Proveedores. Imágenes y videos muestra. (prorrato) Factura folio fiscal: 3DBFE983-A02E-45BB-8C45-B666E4767577 Imágenes muestra Concentrado de prorrato Factura folio fiscal 2BEBA484-253E-4A28-89FE-9CDA5A434175 |

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/909/2021/PUE

| ID | Artículos o servicios denunciados | Conceptos denunciados | Concepto registrado | Póliza | Documentación soporte |
|----|---|-----------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | Concentrado de prorrateo |
| 5 | Almuerzo | Almuerzo | Desayuno | Póliza normal, diario, número 31, periodo 1 | Factura folio fiscal: 0C7EBB4E-A66F-4E27-9D00-AB899946B7AB Concentrado con detalle de eventos de coalición Imágenes de servicios |
| 6 | Artículos para eventos lúdicos o concurso | Balones de futbol | Balones de futbol | Póliza normal, diario, número 26, periodo 1 | Factura folio fiscal: 0CF910C8-72D5-484A-9211-B5E6DCD0E9FB Imágenes de los artículos y evento. (prorrateo) |

Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para acreditar que los conceptos denunciados en el cuadro anterior, así como los gastos erogados con motivo de los mismos, se encuentran reportados en el SIF, en la contabilidad correspondiente a la entonces candidata a Presidenta Municipal de San Martín Texmelucan, postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia”, María Norma Layón Aarum.

En este tenor, toda vez que el Sistema Integral de Fiscalización, es un sistema informático diseñado como medio idóneo, por la autoridad electoral, en el que se establecen las disposiciones para el registro de las operaciones que deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, para que estos con apoyo de la aplicación informática puedan cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización de los recursos.

El Sistema Integral de Fiscalización tiene como finalidad que la información ahí concentrada de forma expedita, fuera sustentada y adminiculada con todos los elementos que permitan a la autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena para la autoridad lo ahí registrado y en conjunto con la documentación exhibida por los sujetos obligados, permita de manera clara conocer la realidad de los hechos materia de valoración

Cabe mencionar que por cuanto a las unidades reportadas por los conceptos referidos, se advirtió que lo que reportó el partido político fue en cantidad igual o mayor, por lo que se da cuenta de que el registro de las operaciones sí tiene efectos vinculantes respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad no solo consideró la referencia al concepto, sino también las unidades involucradas de cada tipo.

En virtud de lo anterior, esta autoridad electoral tiene elementos suficientes para considerar que los sujetos incoados cumplieron con su obligación en materia de fiscalización, consistente en registrar los ingresos y egresos derivados de la campaña de la entonces candidata a Presidenta Municipal de San Martín Texmelucan, postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia”, María Norma Layón Aarum.

Lo anterior, aunado a que el quejoso no aportó mayores elementos que pudieran llevar a esta autoridad a acreditar de que se tratan de gastos de campaña no reportados, por lo cual se concluye que los conceptos fueron registrados en el informe de campaña correspondiente a María Norma Layón Aarum, pues como ya se manifestó, el quejoso únicamente aportó pruebas técnicas, así como la certificación de la existencia de las direcciones electrónicas presentadas, como soporte a sus afirmaciones, sin embargo, no presentó algún otro elemento que permitiera vincular los hechos denunciados.

Por lo anterior, es dable concluir que la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos políticos del Trabajo y MORENA así como a la entonces candidata a Presidenta Municipal de San Martín Texmelucan, María Norma Layón Aarum, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, incisos c) y f), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracciones I y II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse **infundado**, por lo que hace al presente apartado.

APARTADO B. GASTOS NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN, SIN EMBARGO, NO FUERON ACREDITADOS.

Del análisis al escrito que dio origen al procedimiento de mérito, fue posible advertir que contenía en su mayoría argumentos jurídicos que de manera genérica refieren infracciones en materia de electoral, así como el señalamiento de manera vaga de conductas que, a juicio del quejoso, implican el rebase al tope de gastos de campaña por parte del denunciado. Los casos en comento se citan a continuación

| Concepto denunciado | Elemento Probatorio | Reportado en el SIF (Sistema Integral de Fiscalización) | Observaciones |
|---------------------|---------------------|---|---|
| Vasos de vidrio | imagen de Facebook | No se localizó registro | Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto |
| Atomizador | No se ofrece | No se localizó registro | Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto |

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/909/2021/PUE

| Concepto denunciado | Elemento Probatorio | Reportado en el SIF (Sistema integral de Fiscalización) | Observaciones |
|---|----------------------------------|---|--|
| Renta de salones | imagen de Facebook | No se localizó registro | Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto |
| Cronómetro | No se ofrecen pruebas | No se localizó registro | Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto |
| Podio | imagen de Facebook | No se localizó registro | Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto |
| Medallas | No se ofrecen pruebas | No se localizó registro | Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto |
| Inflables | No se ofrecen pruebas | No se localizó registro | Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto |
| Altavoz | Captura de pantalla, video y URL | No se localizó registro | Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto |
| Paquete de globos | Captura de pantalla, video y URL | No se localizó registro | Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto |
| Botellas de agua | Captura de pantalla, video y URL | No se localizó registro | Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto |
| Drone | No se ofrecen pruebas | No se localizó registro | Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto |
| Tableta | Captura de pantalla, video y URL | No se localizó registro | Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto |
| Proyector | No se ofrecen pruebas | No se localizó registro | Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto |
| Pantalla | No se ofrecen pruebas | No se localizó registro | Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto |
| Entrevistas en medios de comunicación y digitales | Captura de pantalla, video y URL | No se localizó registro | Únicamente se cuenta con los datos de registro de los propios portales |

Ahora bien, como se ha señalado previamente, el denunciante presentó con el escrito de queja de forma física, Instrumento notarial sobre certificación del contenido de 81 links relativos al perfil de la otrora candidata María Norma Layón Aarum, en donde quedó certificado en espacio y tiempo determinado, la revisión del referido perfil, a través de diversas pruebas técnicas (imágenes y/o videos), de acuerdo a la liga o link de internet, corresponden a imágenes cargadas (subidas) y como consecuencia de ello, difundidas, en la red social denominada “Facebook”.

En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las imágenes, argumentado que de ellas se advierte el itinerario de los eventos de campaña de la candidato; así como los conceptos de gasto que se observan en

ellas, mismas que actualizan un rebase al tope de gastos de campaña fijado por la autoridad; pues el propio denunciante vincula los links o ligas de internet (Facebook) con conceptos de gasto que según su dicho acreditan dichas erogaciones y que en conjunto pretende se cuantifique al tope en comento para actualizar el rebase de topes denunciado.

Visto lo anterior, tomando en consideración que la queja de mérito se sustenta en medios tecnológicos, lo procedente es analizar los alcances de la misma en cuanto a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto que pretende el denunciante se tomen en cuenta para su cuantificación, considerando que la autoridad se encuentra obligada a determinar los elementos cualitativos y cuantitativos materia de investigación.

Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación denominados redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversas sentencias ha establecido criterios orientadores¹⁹ relacionados con las redes en comento, señalando entre otras cuestiones:

- Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a información de su interés, y su utilización permite la descentralización extrema de la información; por ello y debido a su rápida masificación en el espacio virtual, puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes sociales, en las que sus usuarios intercambian información y contenidos (textos, imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo que crean una comunidad virtual e interactiva.
- Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan.
- Que las redes sociales (como Facebook) constituyen un espacio creado para intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas en cualquier parte del mundo, donde además la comunicación se genera entre un gran número de usuarios que suben y bajan la información ahí difundida.

¹⁹ De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado, SUP-REP-233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015.

- Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera fehaciente, la fuente de su creación, y en consecuencia, ello imposibilita el poder atribuir a un ente o sujeto la responsabilidad del contenido respectivo.

En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que la legislación electoral mexicana vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; en específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya sea electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el acceso a la información por parte de la ciudadanía²⁰. Así pues, mientras que algunos medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios impresos) tienen un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la situación de Internet, en específico las redes sociales carecen de un escenario de regulación normativo.

Respecto de las redes sociales (como Facebook), ha sostenido²¹ que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y de asociación; permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración entre personas.

Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales, involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.

²⁰ Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016, mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el margen reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o personas involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar que en un ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.

²¹ A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, SRE-PSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados por la Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2016.

En efecto, en internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos, documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos.

Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente:

- Tiempo, fechas en que subió la imagen.
- Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.)
- Lugar, los referidos en la red social.

Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social.

Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse que estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello en virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la que el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos:

- Día, hora y ubicación de la realización del acto.
- Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en la que se realiza la publicación.
- Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la publicación primigenia.
- Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro usuario desde la publicación original.

De lo anterior, se desprende que la temporalidad y ubicación de un acto no necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o total del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación a las mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor.

Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía y video digital es la imagen por excelencia de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la consideramos como parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo normal en nuestro día a día; sin embargo, no perdemos de vista que dichos elementos contienen imágenes susceptibles de modificarse y transformar lo que se espera de ellas; lo que nos lleva al tema de la certificación.

Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las redes sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 1, fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la existencia de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que realiza algún fedatario de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por haber presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet relacionada, es decir, el contenido de la red social.

En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.

Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información, que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva de manifestar ideas escritas o transmitir imágenes por dicho medio con la finalidad de obtener reacciones en general.

Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene como premisa el alcance que origina una prueba técnica²², toda vez que del contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos

²² De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización.

incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de prueba adicionales

Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en la Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.-

De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.

Quinta Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Actor: Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores. —Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. —30 de marzo de 1999. —Unanimidad de votos. —Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. —Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. —Actor: Partido Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de México. —30 de abril de 2003. —Unanimidad de cinco votos. —Ponente: José Luis de la Peza. —Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/909/2021/PUE

Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado. —Recurrentes: Partido Verde Ecologista de México y otro. —Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral. —21 de septiembre de 2007. —Unanimidad de seis votos. —Ponente: Constancio Carrasco Daza. —
Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria

Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se pretenden acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias de tiempo, modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de una imagen en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un hecho aconteció en la fecha de exposición de la imagen o las características del acto que se observa así como el número cierto y tipo de conceptos de gasto que se entregaron o en su caso si los mismos constituyen un beneficio a la campaña electoral de que se trate.

Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de vincularse con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los hechos descritos.

Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de que dada la naturaleza de los procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia.

Dicha carga probatoria se encuentra fortalecida en los procedimientos relacionados con campaña en virtud de que el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en

Materia de Fiscalización en su artículo 41, numeral 1, inciso e), señala que además de los requisitos previstos en el artículo 29 de dicha regulación, para este tipo de procedimientos se deben acompañar la pruebas que permitan acreditar la veracidad de los hechos denunciados.

En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los hechos que pretende acreditar, pues únicamente muestra capturas de pantalla, videos, direcciones electrónicas y la mención de elementos que considera el quejoso como gastos que debió reportar el denunciado.

Lo anterior, se robustece con el criterio sostenido por la Sala Superior, al emitir la Jurisprudencia 36/2014, que a la letra establece:

“Jurisprudencia 36/2014. PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para el aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar.

Quinta Época:

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/909/2021/PUE**

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal.—11 de junio de 2008.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-604/2012.—Actores: Evaristo Hernández Cruz y otros.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de Tabasco.—26 de abril de 2012.—Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Pedro Bautista Martínez.

Recurso de reconsideración. SUP-REC-890/2014.—Recurrentes: Habacuq Iván Sumano Alonso y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—1° de septiembre de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Carlos Ortiz Martínez y Javier Aldana Gómez.

Notas: El contenido del artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, interpretado en esta jurisprudencia, corresponde al artículo 57, párrafo 2, de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil catorce, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60.

Visto lo anterior, del análisis efectuado por esta autoridad electoral a los hechos denunciados, así como a los elementos de prueba aportados por el quejoso (fotos, videos y URLs de Facebook), se concluye lo siguiente:

Los gastos correspondientes a: vasos de vidrio, atomizador, renta de salones, cronómetro, podio, medallas, Inflable, altavoz, paquete de globos, botellas de agua, dron, proyector pantalla, entrevistas en medios de comunicación y digitales, no se encontraron localizados en el correspondiente informe de campaña, sin embargo, no fue posible desprender alguna infracción a la normatividad en materia de fiscalización, toda vez que el quejoso no aportó elementos de convicción adicionales, aun cuando la autoridad fiscalizadora desplegó sus facultades para

intentar allegarse de elementos que le permitieran acreditar los hechos denunciados.

En consecuencia, es dable concluir que la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos políticos Trabajo, MORENA, así como la entonces candidata a Presidenta Municipal de San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla, María Norma Layón Aarum, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, incisos c) y f), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracciones I y II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse **infundado**, por lo que hace al presente apartado.

APARTADO C. REBASE DE TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA.

Por lo que hace al presunto rebase de topes de gastos de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla, es de importancia señalarse que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de los gastos de campaña y en el que se reflejan los ingresos y erogaciones declaradas por los sujetos fiscalizados dentro de determinado periodo; así como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización.

Consecuentemente, al momento de emitirse la aprobación del Dictamen Consolidado correspondiente, se determinará si existió vulneración alguna relacionada con las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se actualiza una infracción en materia de tope de gastos de campaña.

4. Vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Ahora bien, toda vez que el escrito de queja denuncia la compra de espacio publicitario en televisión, con fundamento en los artículos 41, apartado A, inciso g) párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, inciso n); 159, numeral 4; 474, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales; 5, numeral 3 y 4 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización dese vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, remitiéndole copia certificada de la presente resolución, para el efecto de que determine lo que en derecho corresponda.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/909/2021/PUE

5. Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el acuerdo INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.

En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.

Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo electrónico.

2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de notificación la realizada “vía electrónica”.

3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.

En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de fiscalización sean realizadas de manera electrónica.

En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/909/2021/PUE

Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su instituto político.]

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara **infundado** el presente procedimiento administrativo sancionador electoral instaurado en contra de la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos políticos del Trabajo y MORENA, así como de la su candidata María Norma Layón Aarum, en los términos del **Considerando 3**.

SEGUNDO. Se da vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en términos del **Considerando 4** de la presente Resolución, para los efectos conducentes.

TERCERO. En términos del **Considerando 5**, notifíquese la presente resolución a los partidos del Trabajo, Morena, así como a María Norma Layón Solís y a Filemón Ramírez Sánchez, mediante el Sistema Integral de Fiscalización.

CUARTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento del Tribunal Electoral de Estado de Puebla y a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.

QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/909/2021/PUE

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la consideración sobre el eventual pronunciamiento a un procedimiento de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y a la exhaustividad en el Proyecto de Resolución originalmente circulado, por diez votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**